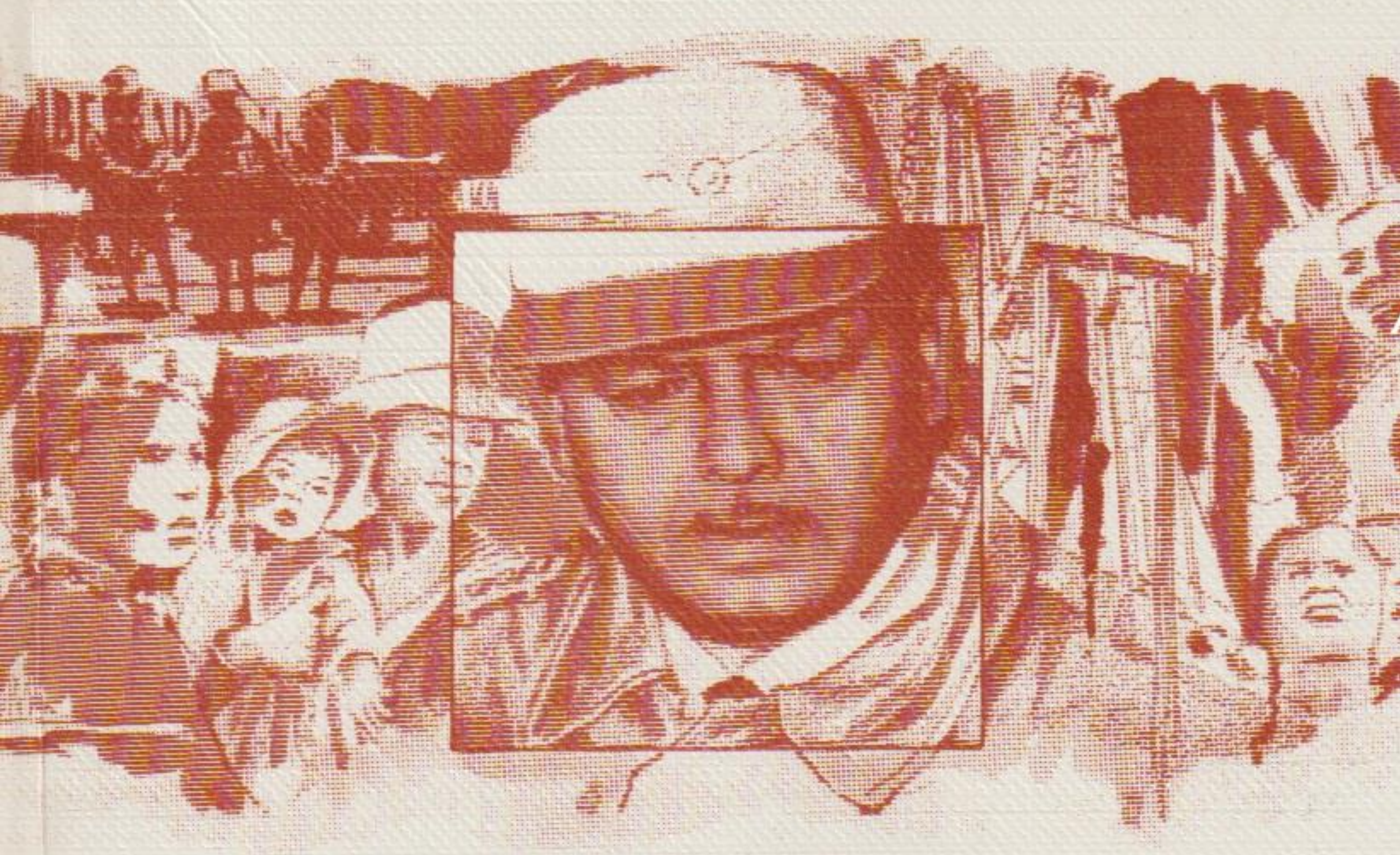
Francisco Guerra García



VELASCO: DEL ESTADO OLIGARQUICO AL CAPITALISMO DE ESTADO

EDICIONES / CEDEP

Francisco Guerra García

Velasco: Del Estado oligárquico al capitalismo de Estado



CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
Y LA PARTICIPACION

Diseño de Carátula
E.Oswaldo Higuchi O.

Asesoría Editorial: LETRA S.R.L.

Impreso en el Perú

"La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla; la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla".

OCTAVIO PAZ

RECONOCIMIENTO

En nuestro país es difícil escribir un libro. Publicarlo resulta, casi siempre, una tarea aún más ardua.

En nuestro caso, pudimos escribir este texto gracias al apoyo del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Las personas que hicieron posible el financiamiento necesario —hace ya varios años— fueron: Rolando Ames, Jorge Capriata, Miguel de Althaus, Orlando Plaza, Waldo Ansaldi, Elena Martínez y, muy especialmente, Francisco Delich.

A María Esther Salazar mi agradecimiento por su siempre eficiente mecanografiado y a Luis Cueva Sánchez y Héctor Béjar por el cuidado de la edición.

a Juan Velasco y Carlos Delgado

CONTENIDO

SIGLAS

ACUNI	Asociación de Centros de la Universidad de Ingeniería.
AP	Acción Popular.
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana.
BID	Banco Interamericano de Desarrollo.
CAE	Centro de Altos Estudios.
CAEM	Centro de Altos Estudios Militares.
CCDP	Confederación Campesina del Perú.
CDUS	Comité de Defensa y Unión Sindical.
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú.
CTP	Confederación de Trabajadores del Perú.
DC	Democracia Cristiana.
ELN	Ejército de Liberación Nacional.
FER	Frente Estudiantil Revolucionario.
FLN	Frente de Liberación Nacional.
FMI	Fondo Monetario Internacional.
FENCAP	Federación de Campesinos del Perú.
FEP	Federación de Estudiantes del Perú.
FETIMP	Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú.
JID	Junta Interamericana de Defensa.
MDP	Movimiento Democrático Peruano.

MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
MOSIC	Movimiento Sindical Cristiano.
MSP	Movimiento Social Progresista.
OEA	Organización de Estados Americanos.
PAP	Partido Aprista Peruano.
PCP	Partido Comunista Peruano.
PCR	Partido Comunista Revolucionario.
POMR	Partido Obrero Marxista Revolucionario.
POR	Partido Obrero Revolucionario.
POR-T	Partido Obrero Revolucionario de los Trabajadores.
TIAR	Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
UNO	Unión Nacional Odriísta.
UR	Unión Revolucionaria.
VR	Vanguardia Revolucionaria.

A MANERA DE PRESENTACION

Francisco Guerra García presenta en este libro sus reflexiones sobre los "años de las reformas" cuando un proceso de revaloración histórica de la experiencia "velasquista" hace su camino en la sociedad peruana.

Velasco: Del Estado oligárquico al capitalismo de Estado, *en cierto modo, continúa y cierra* El Peruano, un proceso abierto, *texto escrito por el propio autor allá por los 75. Reflexiones producidas en dos momentos distintos de la historia reciente del país y desde dos posiciones igualmente distintas ante el poder, ambas expresan una misma actitud ante su objeto: descripción parsimoniosa de los hechos; autocontrol de las explicaciones por la sujeción voluntaria a sus tendencias reconocibles; apertura, condicionada por el realismo, a sus posibilidades de desarrollo. En una y otra reflexión, la misma búsqueda de los significados históricos en la relación de la experiencia con el proceso político iniciado en los 20 y en el escrutinio cuidadoso de las resistencias y posibilidades inscritas en la situación del Perú de los 70. Acaso por ello, las diferencias encontrables entre uno y otro libro se las deban menos al autor que a la propia historia de su objeto de estudio.*

Según Guerra García, el significado político preciso del "velasquismo" se expresa en la cancelación del Estado oligárquico y la generación de otro, históricamente transitorio, el capitalismo de Estado. Reconociendo la dificultad de su comprensión,

éste es y no es, simultáneamente, el fruto del "velasquismo". Lo es, ciertamente, en la medida en que se constituye a partir de la acción del gobierno de la época. No lo es, sin embargo, si se recuerda, entre otras cosas, que la suya fue una experiencia interrumpida. Esta "ambigüedad" será, sin duda, el tema de nuevas controversias interpretativas.

Pero lo será igualmente la tranquila aceptación por el autor de la orientación "de arriba hacia abajo" que hizo posible las reformas. Aceptación que no revela, ciertamente, una elección voluntaria sino el reconocimiento de una "necesidad histórica": por 40 largos años las "direcciones políticas de las masas" no mostraron la capacidad histórica para producir el movimiento que, "desde abajo", realizara las reformas reclamadas desde los 30. Incapacidad histórica que, sin duda alguna, tiene menos que ver con las responsabilidades personales y colectivas de los dirigentes del APRA y la izquierda leninista que con el complejo y específico patrón histórico que gobernó el desarrollo de la sociedad peruana tradicional. En efecto, el contenido simultáneamente étnico y económico de las relaciones de dependencia externa y dominación interna que tan radicalmente determinaron la modalidad jerárquica y autoritaria de todos los lazos de poder en el Perú; la sustantiva heterogeneidad de las tradiciones históricas y de las condiciones de trabajo, vida y cultura de la población; la marginación de la vasta mayoría de los peruanos de cualquier medio organizado de acceso a las oportunidades de riqueza, poder e influencia; las experiencias frecuentes de fracaso de los movimientos reivindicativos y la organización de la memoria colectiva en torno a las derrotas de los movimientos nacionales; y, finalmente, la extrema parcialidad de los intereses que orientaron la conciencia y la acción política constituyeron, en su interconexión y mutuo reforzamiento, las resistencias que, más allá de la voluntad de los actores políticos pero muchas veces por su intermedio, impidieron al país realizar su transformación nacional, sea por medios democrático-institucionales, sea por la vía de una insurrección popular.

Como es fácil entender hoy, la misma combinación de condiciones y procesos históricos que bloquearon "la revolución de abajo hacia arriba", esto es, "la revolución deseable", prefiguraron entonces la modalidad autoritaria, centralizada y vertical que adoptaría la "forma política posible" de realización de las reformas. No es por tanto una ironía histórica, que los que decidieron comenzar a encarnar en la realidad, de modo inevitablemente imperfecto, los discursos de Haya y Mariátegui tuvieran que hacerlo desde el poder central del Estado y por la fuerza de las armas. Modo imperfecto, hemos dicho, y no sólo por la "forma política" que adoptó el proceso, (una vez comprobada la impotencia de los "seguidores" de Mariátegui y del propio Haya para transformar el país), sino también, y acaso sea ello lo importante, porque el proyecto original de los 70 no sólo empezaba a cerrar el ciclo histórico abierto por aquéllos sino que intentaba abrir un ciclo distinto.

Aun cuando entiendo el carácter discutible de esta interpretación ella nos conduce a reconocer que uno de los méritos del grupo promotor de la intervención militar radicó en su percepción de que las reformas sociales, esto es, el inicio de la conversión de las propuestas de los 30 en realidades históricas, sólo podían realizarse, en las condiciones del Perú del 68, por la mediación de una "revolución desde arriba". Plantear el problema en estos términos, nos asoma a una comprobación, que no por sorprendente y controvertible deja de ser intelectualmente estimulante y eventualmente plausible: los "verdaderos mariateguistas y hayistas", para usar el confuso lenguaje político de hoy, no se encontraban en ese entonces en las direcciones de los partidos identificados nominalmente con ambos legados sino disputando en las alturas del Estado el sentido de las reformas y produciendo, con Velasco a la cabeza, los cambios posibles.

Ciertamente, se nos puede decir que el consenso nacional existente a fines de los 60 e inicios de los 70 acerca de las reformas a realizar en el país hubieran hecho políticamente posible transformar gradualmente la forma "autoritario-burocráti-

ca" del proceso de cambios. Este argumento se acompaña generalmente, aún hoy, de otro por el cual es la formación castrense, la ideología autoritaria o la verticalidad de la fuerza armada la que impidió el encuentro entre la dirección política del proceso y el movimiento popular. El reconocimiento, desde esos años hasta hoy, del peso real de la "mentalidad militar" (como de otras condiciones que no es el caso señalar ahora) en la forma política que adoptó la acción de gobierno no nos inhibe, sin embargo, de reiterar nuevamente que el mantenimiento de la orientación "de arriba hacia abajo" encuentra una explicación, tan poderosa como la señalada, en el comportamiento de las direcciones políticas del APRA y de las jóvenes dirigencias de los distintos grupos leninistas que se desarrollaron a la "izquierda" del PC. El reconocimiento a posteriori del valor de las reformas de la época no exhime a tales dirigencias, según mi opinión, de la responsabilidad política por el grave error cometido en esos años. No se trata, y en ello queremos ser enfáticos, de recordar con ira o ceder a la más bien nostálgica reflexión acerca de la evolución que hubiera adoptado el proceso si el APRA o las "nuevas izquierdas leninistas", reteniendo su legítimo derecho al ejercicio de su independencia política, hubieran simplemente reconocido, si no el diseño, al menos la intencionalidad trasformadora de las reformas. Ello, como se sabe, no sólo no ocurrió sino que en su lugar se intentó, en un caso, derrocar el gobierno militar y, en el otro, crear las condiciones para su más rápida desestabilización. Como es fácil entender, tal comportamiento objetivamente impulsó y reforzó las tendencias controlistas y autoritarias existentes en el gobierno y fue progresivamente estrechando el campo de acción de aquéllas que, dentro de éste, luchaban por expandir las reformas y democratizar el estilo político de ejercicio del poder. Pienso que hoy es más fácil percibir cómo ese comportamiento, interactuando con la presión económica y política internacional, la acción de los servicios de inteligencia norteamericanos y la oposición de todos los grupos de poder interno contribuyeron al mantenimiento de la

forma política de ejercicio del gobierno y a la creación de las condiciones que prepararon el golpe del 75.

Si recordamos lo anterior es porque ello torna, por lo menos discutible, el argumento del consenso nacional existente a fines del 68 en torno a las reformas. El APRA, reteniendo su implantación popular, se había comprometido políticamente desde los 56 con las fuerzas más conservadoras de la sociedad peruana y se inhibió por décadas de cualquier acción positiva en la promoción de lo que fueron sus banderas originales. Acción Popular, desde el poder, había abandonado su elan reformista aunque un sector importante de sus dirigencias y bases mantenía sus posiciones originales. Si a ello se agrega la conocida posición conservadora de la Unión Nacional Odriísta, lo que no le impedía ciertamente contar, como se recuerda, con bases populares significativas, entonces será fácil convenir en que las fuerzas políticas electoralmente más poderosas del país en los últimos años de los 60 no expresaban ninguna disposición políticamente consistente en favor de las reformas. El consenso como tal, esto es, como disposición activa o como conducta positiva sólo se expresaba a través del Social Progresismo, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, una facción de AP, grupos intelectuales y las dirigencias del movimiento sindical, campesino y universitario, organizaciones y grupos importantes pero no mayoritarios en el país, al menos en el plano electoral. Si lo señalado hasta aquí hace debatible la idea del carácter nacional del consenso, el comportamiento real de la dirección del APRA y de diversos partidos leninistas frente a las reformas de la época debilita aún más el argumento. En efecto, si éstas no se expresaron en favor de los cambios fue porque, si bien pudieron estar teórica, declarativa o subjetivamente de acuerdo con ellas, mucho más poderosa resultó la consideración de sus propios intereses partidarios. En otros términos, más importantes que las reformas sociales era quién las realizaba.

Envuelto en todo ello estaba una forma de mirar los problemas del país por la cual la consideración de las necesida-

des históricas y de los intereses nacionales de cambio y desarrollo se subordinaban a las necesidades partidarias de conducción del gobierno y a los intereses grupales de administración de los cargos públicos. Se perdió de vista entonces que la producción de los cambios sociales en sociedades como la nuestra, por su dramática necesidad como por su extraordinaria complejidad, comprometen el sentido de responsabilidad política de todos los sujetos sociales y partidarios interesados en ellos, sea cual fuere la posición que se ocupe, la orientación que se promueva y el rol que se cumpla, y que el curso del proceso político de cambios y su suerte final son coproducción y corresponsabilidad colectiva.

Pero la conducta orientada a derrocar el gobierno de Velasco o promover su desestabilización tiene su explicación también en las predicciones del futuro elaboradas por las direcciones de las organizaciones leninistas de la nueva izquierda y el APRA. La evolución del país del 75 al 83 se encargó, con daño para todos, de desmentirlas. No eran ni un gobierno socialista ni una democracia social lo que el futuro preparaba. El recambio de Velasco era y fue el pasado.

Los años han pasado y pienso que todos, finalmente, estamos aprendiendo. Tratamos de aprender nosotros, los que participamos en el gobierno de Velasco y la promoción de las reformas, reconociendo las limitaciones de nuestros conocimientos y los errores cometidos en la acción. Tratan de hacerlo los partidos renovándose internamente y esforzándose por establecer un lazo más abierto, respetuoso y democrático con el país. Son precisamente los aprendizajes históricos, el desarrollo de los conocimientos sociales, la progresiva maduración de la conciencia nacional los que nos permiten hoy enraizar la esperanza de un encuentro de todos los agentes de cambio en el país para la promoción de una nueva y más profunda transformación nacional. Cuando ello ocurra, cuando sepamos reiniciar en reciprocidad y colaboración *la lucha por la segunda revolución nacional, habrá concluido, ahora sí para siempre, el*

movimiento que Velasco inició casi solitariamente el 3 de octubre de 1968.

El libro, que hoy tan sumariamente presentamos, está habitado por ese empeño. Si él, como creemos, impulsa una nueva y más madura reflexión colectiva y estimula el compromiso político con la renovación del país, habrá cumplido su propósito.

CARLOS FRANCO

I PARTE

EL ESTADO OLIGARQUICO

Como sabemos, todo proyecto político transformador se enraiza en el pasado y se proyecta al porvenir de la sociedad en la cual se desarrolla. Del conjunto de interrogantes y temáticas que se abren a partir de este enfoque, en esta primera parte, trataremos de abordar dos que nos parecen esenciales y que se encuentran estrechamente relacionadas: 1) ¿En qué sentido, la revolución conducida por Velasco entroncó en la tradición de las luchas populares? 2) ¿Cómo se mantuvo el Estado oligárquico y, en relación con ello, cuáles eran los procesos sociales que lo iban minando y cuál era la percepción de los problemas y demandas políticas y sociales que en 1968 expresaban las exigencias de transformación social y liberación política?

Intentando responder estas preguntas, estaremos en condiciones de descubrir las líneas de continuidad y ruptura histórica dentro de las cuales puede revelarse el sentido último del proceso dirigido por Velasco

1. *LA REVOLUCION PERUANA COMO EXPRESION DE LA CONTINUIDAD DE LAS LUCHAS POPULARES*

El estudio de todo fenómeno político requiere la consideración atenta de sus antecedentes. No es posible comprender su significación más honda sin rastrear sus causas más profundas. En este sentido, en la búsqueda de las raíces de la revolución peruana muy pronto se descubre que la sola enumeración de los

acontecimientos que precipitaron la caída del gobierno de Belaúnde es insuficiente para explicar la envergadura de los cambios realizados entre 1968 y 1975. Del mismo modo, el estudio y balance del gobierno de Velasco tampoco da cuenta de la calidad y cantidad de los cambios y, sobre todo, no permite explicar y descubrir la amplitud de ciertos consensos y la madurez de muchas situaciones que lo hicieron posible. Sólo remontándonos cuatro décadas atrás y regresando a los años finales de la década del 20 podemos encontrar los antecedentes más claros y las raíces más firmes del proceso que se iniciara en octubre de 1968. La tesis que sostenemos puede resumirse en los siguientes términos: en los últimos años del gobierno de Leguía surgen ya los fundamentos de las estructuras que tuvo el Perú hasta 1968, apareciendo de este modo muchos de los problemas y características del Perú moderno.[1] En esta época surge una nueva conciencia nacional en torno a los problemas del país y a la dinámica de su desenvolvimiento, se crean nuevas formas de organización política que aspiran a transformar esa realidad y se desarrollan crecientes expectativas en capas cada vez más extendidas de la población. Ahora bien, a lo largo de todo el período que va desde esos años hasta 1968, esos problemas y esas expectativas sólo encontraron una respuesta eficiente en el movimiento iniciado por un reducido grupo de altos oficiales del ejército bajo la conducción del general Juan Velasco Alvarado.

2. *EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA CONCIENCIA NACIONAL*

José Carlos Mariátegui.—En setiembre de 1926 dirigida por Mariátegui nace "Amauta". Esta extraordinaria publicación es quizá la mejor expresión de aquellos años: clara orientación doctrinaria —un marxismo abierto, creador y crítico—; interés serio y riguroso por el conocimiento y debate de los problemas nacionales; apertura y tratamiento lúcido de la realidad internacional de su época; preocupación cuidadosa por difundir nuestras mejores expresiones culturales.

1. Julio Cotler, *Clases, estado y nación en el Perú*, IEP, Lima, 1978, pág. 184.

En 1928 aparece "Labor" y ese mismo año, reuniendo sus escritos publicados en "Mundial" y "Amauta", Mariátegui publica sus "Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana". Este notable trabajo, expresión de un análisis creativo y una observación aguda sentó las bases de la interpretación marxista de la realidad nacional y asumió el proyecto de una revolución peruana que debería ser "simple y puramente la revolución socialista".

A través del análisis de la evolución económica, el problema del indio y de la tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, el centralismo, el regionalismo y el proceso de la literatura, Mariátegui articula una interpretación de la realidad nacional partiendo de las bases económicas de la evolución de nuestra sociedad cuyo origen se encuentra en la conquista española. Desde esta perspectiva, el proceso de constitución del Perú genera desde su inicio una estructura antinacional, porque impone un régimen de servidumbre para las grandes mayorías y una subordinación del trabajo productivo de los peruanos a los intereses imperialistas, en primer lugar de España y luego de Inglaterra y los Estados Unidos.

Truncada la evolución de la sociedad autóctona, a la que se reconoce la creación de una cultura que privilegió valores colectivos y la adecuación entre el hombre y su medio ambiente, se establece una sociedad feudalizada que se prolongará durante la República donde un tono colonial "penetra y tiñe toda la vida peruana, desde el régimen legal, hasta la educación y la cultura".[2]

Como bien ha señalado José Aricó, en una época difícil y de cristalización dogmática de la historia del movimiento obrero y socialista mundial, Mariátegui supo establecer una relación inédita y original con su sociedad. La crítica radical de las interpretaciones miméticas y economicistas lo llevó a un redescubrimiento de la realidad peruana en la cual busca la identidad

2. Augusto Salazar Bondy, *Historia de las ideas en el Perú Contemporáneo,* Lima, 1965, Vol. II, págs. 334-335.

nacional a partir del reconocimiento, la comprensión y la adhesión a las luchas de las clases populares. Vinculando el problema del indio con el problema de la tierra encontró en la estructura agraria las raíces del atraso del país y, teniendo en cuenta que en el Perú "las masas —la clase trabajadora— son en sus cuatro quintas partes, indígenas", definió como eje teórico de su reflexión la "confluencia o aleación de indigenismo y socialismo".[3]

En consecuencia, según Mariátegui, la solución del problema campesino era la clave de la transformación nacional y por su conciencia de que las posibilidades de la industrialización requerían de un largo plazo, afirmó que el Perú tenía que desarrollar su economía sobre la base de la producción de materias primas y, por ello, consolidar su economía agrícola.

Para Mariátegui la nación peruana no había sido aún constituída. Su logro implicaba romper las trabas que impiden la transformación del país. La reforma del agro y la superación de la sujeción imperialista son las ideas centrales del programa de acción de la revolución socialista cuya realización sería la obra del proletariado, de la clase de los productores.

Víctor Raúl Haya de la Torre.—En 1927 sale a luz "Por la Emancipación de América Latina" primer libro de Haya de la Torre. Es la época en que el Apra —Alianza Popular Revolucionaria Americana— levanta las banderas de la unidad política y económica del continente y aspira, en consecuencia, a constituir un movimiento de carácter continental. De allí los cinco puntos que deberían servir de base para las acciones nacionales de cada país latinoamericano: acción contra el imperialismo yanqui, unidad de América Latina, nacionalización de tierras e industrias, internacionalización del Canal de Panamá, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Entre marzo y abril de 1928 —según los compiladores de sus obras completas— Haya escribe "El Antiimperialismo y el Apra", libro que será publicado en 1935. Esta fue su primera obra or-

3. José Aricó, *Mariátegui y los orígenes del pensamiento marxista latinoamericano,* Siglo XXI, S. A., México 1978.

gánica y sin duda la más significativa y de mayor proyección. En ella se plantea que la doctrina del Apra constituye "dentro del marxismo una nueva y metódica confrontación de la realidad indoamericana con la tesis de Marx que planteara para Europa" y que es "imperativo reconocer que la aplicación global y simplista a nuestro medio de doctrinas y normas de interpretación europea debe estar sujeta a profundas modificaciones".[4]

La interpretación de la realidad peruana que Haya de la Torre construye en sus primeras obras es indesligable de su concepción integradora de América Latina y de la necesaria lucha antiimperialista: el primer problema de los países "indoamericanos" es su libertad nacional amenazada por el imperialismo que impedirá por la violencia cualquier intento político o social de transformación. El imperialismo no puede ser afrontado sin una política de unidad latinoamericana. Los problemas más profundos de toda América Latina son comunes: el problema del indio, la explotación de la mano de obra barata, el entreguismo de las clases gobernantes, el progresivo sometimiento económico y político, etc. Por todo ello se requiere la federación de los Estados indoamericanos y la transformación de las actuales fronteras en meros límites administrativos.

La penetración imperialista es causante también del carácter dual de la economía, de la existencia de diferentes intensidades y ritmos de desarrollo: la superposición de "diversas etapas sociales" es el más trágico y tremendo problema del Perú y América. No existen problemas aislados sino aspectos de uno grande y común. Y en esa totalidad orgánica que es América Latina el objetivo primordial es la lucha antiimperialista.

Para el líder aprista, en sus obras "aurorales" el capitalismo no será destruido en los países coloniales o semicoloniales. Antes de la revolución socialista que "llevaría" al poder al proletariado debe pasarse por períodos previos de transformación económica y política que realicen la emancipación nacional y po-

4. Víctor Raúl Haya de la Torre, *El Antiimperialismo y el Apra.* Obras Completas, Vol. IV. II. págs. 150.

lítica indoamericana. La etapa capitalista debe cumplirse en nuestros países bajo la égida del Estado antiimperialista que "desarrollará el capitalismo de Estado como sistema de transición hacia una nueva organización social", no en beneficio del imperialismo, sino en beneficio de las clases productoras.

El Apra es el Partido Revolucionario Antiimperialista Latinoamericano que organiza el frente único de trabajadores manuales e intelectuales que debe luchar para capturar el poder político, instaurar el Estado antiimperialista y constituir una Federación de Estados Indoamericanos. El Apra no es un partido monoclasista. Es la unión de los obreros, campesinos, hombres de clase media –pequeña burguesía urbana y rural– estudiantes e intelectuales de vanguardia.

La captura del poder y el inicio de la formación del Estado antiimperialista implicará la nacionalización progresiva de la tierra y de la industria, la desfeudalización del campo, la liberación del campesino y la organización del nuevo sistema económico estatal de base cooperativa que controlará las industrias, destruirá los monopolios imperialistas y asegurará el dominio nacional de la riqueza. En un país como el Perú donde no existe una burguesía nacional autónoma y poderosa, en el cual predominan las masas campesinas y el proletariado está en completa minoría el dominio del Estado debería ser compartido por las clases productoras: campesinos, obreros y las clases medias urbanas y rurales.

En estos primeros trabajos, el problema de la identidad más que nacional es un problema latinoamericano. No existe una reflexión sistemática sobre el Perú como una nación distinta del resto de Indoamérica. Según Haya "al Perú los españoles no le han dejado nada".[5] Si en México, el conquistador se fundió con el indio, eso no ocurrió en nuestro país. El sistema republicano cambió las denominaciones, pero la esencia de las instituciones no varió. Cuando en la costa no se pudo obligar a trabajar

5. Víctor Raúl Haya de la Torre, *Por la Emancipación de América Latina*, Obras Completas, Lima 1976, Vol. I, pág. 61.

al indio de la sierra, se importó al negro. "Pero el indio siguió siendo el esclavo del blanco, y lo singular en el Perú es que esa esclavitud continúa".[6] La clase dominante jamás enfrentó los problemas fundamentales de la nación.

Jorge Basadre.—Entre 1929 y 1931 Jorge Basadre publicará tres libros que deben considerarse entre las obras fundadoras de la historiografía peruana contemporánea y decisivos para la comprensión de la evolución política y social del país: "La iniciación de la República" (dos volúmenes, 1929 y 1930), "La multitud, la ciudad y el campo" (1929) y "Perú: problema y posibilidad" (1931).

Esos libros, como el propio autor lo indicara años más tarde, eran el fruto de una época y del conjunto de corrientes espirituales que lo deciden a asumir una actitud y a emprender una tarea: la búsqueda de la razón de ser del Perú y la dinámica de su proceso histórico.

Como muchos de los hombres de su extraordinaria generación, Basadre expone una visión crítica, desgarrada y rebelde del Perú. Pero, a diferencia de la mayoría de ellos y de quienes los antecedieron —sobre todo de González Prada— su mensaje no es principalmente de protesta y de condena. Una mayor preocupación científica, vale decir, un esfuerzo tenaz por el conocimiento metódico y por la subordinación de sus propias posiciones y simpatías, le otorga un mayor equilibrio y una amplia perspectiva en su interpretación del proceso histórico peruano y, especialmente, en su preocupación por la realización de "la promesa peruana".

Desde sus primeros años de investigador iniciará esa tarea. Quizá en el Perú, nadie como él encarne mejor al intelectual comprometido con el estudio y la realización de la nacionalidad. Desde su juventud frente a la facilista "negación nacional", sin concesiones, Basadre se yergue, no en la defensa, sino en la búsqueda de los problemas y posibilidades del destino histórico del Perú.

6. Ibid. Pág. 62.

En su quehacer de historiador, intentará un enfoque total de la historia peruana, esforzándose por despojarla de los prejuicios y pasiones que impiden una interpretación más serena y veraz. Critica así las anteojeras de los partidarios y de los enemigos de España; los prejuicios de quienes privilegian la importancia del líder o de la masa; el irrealismo y la estrechez de miras de las posiciones extremas, sean ellas liberales o conservadoras, unitarias o federales, "el separatismo, el indigenismo puro y anticivilizado, el antilimeñismo avidoso, el limeñismo pedante y ensimismado, todo lo que hay de aldeano y lugareño. . .".[7]

Para Basadre, la conquista española no sólo fue conquista. "El conquistador casi siempre se quedó en América y sufrió su influencia: vencedor fue así vencido".[8] Con ironía recuerda que todavía es necesaria la defensa del mestizaje y que los pueblos se diferencian por los ambientes y la contextura social más que por la raza. "Los grandes representativos de la América auténtica han sido mestizos desde Garcilaso Inca hasta Bolívar".[9]

Si en el Perú la cuestión social fue planteada por los levantamientos indígenas y su símbolo es Túpac Amaru, su reflexión y solidaridad se acrecienta con Pumacahua, cuyo "utópico triunfo" hubiese sido el éxito del Perú fusionado, ni extranjerizado ni regresivo, ni alejado de lo criollo como Túpac Amaru, ni alejado del indio como la emancipación sanmartiniana y bolivariana.

Sobre la base de la cultura Inca, el aluvión de la conquista realiza "una nueva formación social".[10] El "unitarismo centralista del incanato, de la colonia y de la república será la condición que posibilite que el Perú sea el Perú", imponiéndose de este modo a las tendencias localistas de las culturas preincaicas, el particularismo de los encomenderos y a la disociación anárquica y caudillista de la primera república.

7. Jorge Basadre, *Perú: problema y posibilidad*, Biblioteca Peruana, Lima, 1931, pág. 241.
8. Jorge Basadre, *La multitud, la ciudad y el campo*, Editorial Huascarán, Lima, 1947, pág. 35.
9. Jorge Basadre, 1931, pág. 122.
10. Jorge Basadre, 1947, pág. 260.

A lo largo de la república, Basadre busca la existencia de la nación en la multitud —esa eventual forma del espíritu colectivo—; en el pueblo —ese pueblo que abarca todas las clases que aportan algo productivo a la vida social—; en las minorías y en los grandes hombres, que nada valen por sí, si no encarnan y expresan necesidades, valores y problemas colectivos. Evoca así "las multitudes que soñaron, se agitaron, se sacrificaron, gozaron y murieron" por el Perú en julio de 1821; mayo de 1866; durante la guerra con Chile y en las grandes rebeliones populares que conmovieron el país en 1854, en 1865 y en 1895. Recuerda que peruanos fueron: Olaya, León Pinelo, Pancho Fierro, Unánue y Salaverry, Guisse, Fitzcarrald, Wiesse, Bolognesi, Raymondi, Zulén, etc.

El Perú no es sólo un Estado. Es un país en trance de constituirse como nación. Es una sociedad que marcha hacia su integración a pesar de las supervivencias coloniales, de los privilegios del clero, de la persistencia del centralismo, del incremento de la dependencia. El capitalismo no puede solucionar los problemas del país, porque en su esencia está la subordinación al interés de unos pocos, el egoísmo y la codicia. Con el socialismo debe culminar el proceso de formación histórica del Perú. "Demorará, sufrirá derrotas y traiciones, será o no precedido por estados previos. . . pero vendrá..."[11]

En esos años aparece "Nuestra comunidad indígena" de Hildebrando Castro Pozo. Se publican "La realidad nacional" y "El debate constitucional" de Víctor A. Belaúnde. Salen a luz "Tempestad en los Andes" de Luis E. Valcárcel, "El nuevo indio" de José Uriel García y "El descentralismo" de Emilio Romero. Y en esos años, surge también y, no por accidente, una pintura de gran fuerza y calidad. En Sabogal, Camilo Blas, Vinatea Reinoso, Julia Codesido y Mario Urteaga madura una mirada amorosa, firme y orgullosa del Perú y de lo peruano.

Esta nueva visión reinterpreta nuestro pasado nacional. Abierta a un amplio horizonte de ideas y realizaciones —la re-

11. Ibid, pág. 272.

volución mexicana, la revolución rusa, la revolución china, el surgimiento del fascismo, etc.— proyectó la construcción del país mediante un esfuerzo que descubre, denuncia y enfrenta los más agudos e importantes problemas de la época: el carácter internacional de la economía contemporánea y las nuevas formas de penetración del imperialismo, el dominio oligárquico, el problema del indio y de la tierra, el centralismo, el carácter desigual y peculiar de nuestro desarrollo, etc.

Esta nueva conciencia nacional inspira los movimientos políticos antioligárquicos y antiimperialistas que convocan a las clases populares y a los sectores medios urbanos a una acción transformadora de la sociedad. En este período histórico se iniciará la formación de los partidos políticos modernos y la difusión de ideologías favorables al cambio.

3. *NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACION POLITICA*

Como expresiones políticas de este momento histórico de enorme significación para la transformación del país y la construcción de la nacionalidad aparece en 1928 el partido socialista del Perú y en 1930 el partido aprista peruano.

En estas breves líneas, no nos interesa —a diferencia del enfoque convencional de la izquierda peruana— marcar las diferencias entre los partidos y las concepciones que de ellos tuvieron sus fundadores. Consideramos más rico y sugerente esbozar sus proposiciones doctrinarias más importantes y, enumerar, aunque sea en forma apretada, los planteamientos concretos que contienen las reivindicaciones inmediatas considerándolos como tendencias de un mismo proceso. Es posible que sorprenda la abundancia de puntos de contacto entre ambos programas como sorprenda, también, su larga vigencia en la vida, política del país.

El Programa Socialista. Producido el alejamiento entre Mariátegui y el grupo aprista, en setiembre de 1928 se constituye la célula inicial del partido socialista del Perú. La redacción del programa fue encomendada a Mariátegui. Este documento

político es anterior al programa mínimo del partido aprista y está compuesto por una declaración doctrinaria y un conjunto de reivindicaciones inmediatas.

Veamos las proposiciones más relevantes incluidas en los nueve puntos de la exposición doctrinaria.

"1. El carácter internacional de la economía contemporánea que no consiente a ningún país evadirse a las corrientes de transformación surgidas de las actuales condiciones de la producción.

2. El carácter internacional del movimiento revolucionario del proletariado... fácil es comprender la ley histórica que, en una época de más acentuada interdependencia y vinculación de las naciones, impone que la revolución social, internacionalista en sus principios se opere con una coordinación mucho más disciplinaria e intensa de los partidos proletarios.

3. El agudizamiento de las contradicciones de la economía capitalista... El imperialismo no consiente a ninguno de estos pueblos semicoloniales, que explota como mercado de su capital y sus mercaderías y como depósitos de materias primas, un programa económico de nacionalización e industrialismo. Los obliga a la especialización, a la monocultura...

4. El capitalismo se encuentra en su estadio imperialista. Es el capitalismo de los monopolios del capital financiero, de las guerras imperialistas... la praxis del socialismo marxista en este período es la del marxismo-leninismo... El Partido Socialista del Perú lo adopta como su método de lucha.

5. La economía precapitalista del Perú republicano que, por la ausencia de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado el lento avance del país en la vía capitalista, no puede liberarse bajo el régimen burgués... Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir.

6. El socialismo encuentra lo mismo en la subsistencia de las comunidades que en las grandes empresas agrícolas, los elementos de una solución socialista de la cuestión agraria, solución que tolerará en parte la explotación de la tierra por los pequeños agricultores ahí donde el yanaconazgo o la pequeña propiedad recomiendan dejar a la gestión individual, en tanto que se avanza en la gestión colectiva de la agricultura, las zonas donde ese género de explotación prevalece. . .

7. Sólo el socialismo puede resolver el problema de una educación efectivamente democrática e igualitaria, en virtud de la cual cada miembro de la sociedad reciba toda la instrucción a que su capacidad le da derecho. . .

8. Cumplida su etapa democrático-burguesa la revolución deviene en sus objetivos y en su doctrina revolución proletaria. . .

9. El Partido Socialista del Perú es la vanguardia del proletariado, la fuerza política que asume la tarea de su orientación y dirección en la lucha por la realización de sus ideales de clase".[12]

Las propuestas más interesantes contenidas en las reivindicaciones inmediatas son: reconocimiento amplio de la libertad de asociación, reunión y prensa obreras; reconocimiento del derecho de huelga para todos los trabajadores; establecimiento de los seguros sociales y de la asistencia social del Estado; cumplimiento de las leyes de accidentes del trabajo, de protección de las mujeres y menores y de la jornada de ocho horas en las faenas de la agricultura; establecimiento de la jornada de las siete horas en las minas y en los trabajos insalubres; obligación de las empresas mineras y petroleras de reconocer a sus trabajadores, de modo permanente y efectivo, todos los derechos que les garantizan las leyes del país; aumento de los salarios en la industria, la agricultura, las minas, los transportes marítimos y terrestres y las islas guaneras, en proporción con el costo de vida y con el derecho de los trabajadores a un tenor de

12. R. Martínez de la Torre, *Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú*, Lima, 1974, Vol. II, págs. 398-400.

vida más elevado; abolición efectiva de todo trabajo forzado o gratuito y abolición y punición del régimen semiesclavista de la montaña; dotación a las comunidades de tierras de latifundios para la distribución entre sus miembros en proporción suficiente a sus necesidades; adjudicación a las cooperativas y a los campesinos pobres de las tierras ganadas al cultivo por las obras agrícolas de irrigación; implantación del salario y sueldo mínimo; ratificación de la libertad de cultos y enseñanza religiosa; gratuidad de la enseñanza en todos sus grados, etc.[13]

El Programa Aprista. En 1926 Haya de la Torre publica "¿Qué es el Apra?", pieza convertida posteriormente en el primer capítulo de "El Antiimperialismo y el Apra". En este trabajo expresará sus conclusiones sobre las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos, vale decir, sobre la lucha de clases y el imperialismo yanqui en América Latina:

1. Las clases gobernantes de los países latinoamericanos, grandes terratenientes, grandes comerciantes y las burguesías son aliadas del imperialismo.

2. Esas clases tienen en sus manos el gobierno de nuestros países a cambio de una política de concesiones, empréstitos u otras operaciones que los latifundistas burgueses, grandes comerciantes y los grupos o caudillos políticos de esas clases negocian o participan con el imperialismo.

3. Como resultado de esta alianza de clases, las riquezas naturales de nuestros países son hipotecadas o vendidas, la política financiera de nuestros gobiernos se reduce a una loca sucesión de grandes empréstitos y nuestras clases trabajadoras, que tienen que producir para los amos, son brutalmente explotadas.

4. El progresivo sometimiento económico de nuestros países al imperialismo deviene sometimiento político, pérdida de la soberanía nacional, invasiones armadas de los soldados y mariners del imperialismo, compra de caudillos criollos, etc. Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo, Haití son verdaderas

13. Ibid, págs. 400-402.

colonias o protectorados yanquis como consecuencia de la política de penetración del imperialismo.

Relegado el propósito de constituir un movimiento continental, en 1930 se organiza el Partido Aprista Peruano. En 1931 aparece La Tribuna, diario oficioso del PAP dirigido por Manuel Seoane. En octubre de 1931, ante una manifestación en la Plaza San Martín, Haya de la Torre recibirá el Programa Mínimo, llamado también Plan de Acción Inmediata que había sido debatido y preparado en el Primer Congreso Nacional Aprista.

Este programa mínimo era en realidad un extenso documento ordenado en trece secciones precedidas por una propuesta inicial referida a la estructura económico-político-social del Estado. Las secciones mencionadas correspondían a los siguientes temas: el Perú ante América y el Mundo, administración pública, economía y finanzas, cuestiones agrarias, minería, trabajo, educación, redención del indio, justicia, higiene y asistencia social, obras públicas, inmigración y ejército, armada y policía y aviación.

Dada la amplitud del programa y solamente con el fin de indicar someramente su orientación y contenido, veamos algunos de sus más importantes planteamientos: modificación de la demarcación política de territorio de la república con criterio fundamentalmente económico; organización funcional del Parlamento y las Municipalidades; autonomía administrativa y económica de las regiones del país; educación gratuita; seguro social para todo ciudadano que vive de su esfuerzo personal; reconocimiento de los derechos políticos de la mujer y de su independencia en el ejercicio de sus derechos civiles dentro del matrimonio; separación de la Iglesia y el Estado; adquisición de la ciudadanía a la edad de 18 años; estrecha vinculación económica e intelectual entre los pueblos de América Latina; pacto con los pueblos latinoamericanos para la defensa ante cualquier peligro imperialista; reforma integral de la legislación tributaria; reglamentación de los alquileres condicionando la merced conductiva al valor de los inmuebles; recaudación directa de las rentas por el Estado; anulación de los monopolios concedidos a

los particulares y de los contratos lesivos para la soberanía nacional; fomento de las cooperativas de crédito, producción y consumo; nacionalización progresiva de los medios de transporte; control y restricción de la exportación de capitales; expropiación pagando su valor justipreciado, de aquellos fundos que el Estado estime conveniente, sea por excesiva extensión, explotación indirecta, hipotecas no redimibles, ubicación inmediata a los grandes centros de consumo, etc.; revisión de la cuestión de la Brea y Pariñas; efectividad de la jornada máxima de ocho horas, salario y sueldos mínimos, según las condiciones de cada región; reforma integral de la educación, con tendencia a la escuela unificada desde el kindergarten a la universidad; incorporación del indio a la vida del país; legislación en pro de la conservación y modernización de la comunidad indígena; reorganización del poder judicial; apartamiento del ejército, la armada, la policía y la aviación de la política y de la política en sus institutos, etc.

4. *EL PENSAMIENTO UTOPICO EN EL PERU DE LOS AÑOS VEINTE*

Karl Mannheim en "Ideología y Utopía" [14] libro que debe ser considerado como uno de los trabajos más penetrantes y lúcidos sobre el pensamiento y el conocimiento político contemporáneos, propone definir como utopías aquellas orientaciones que trascienden la realidad y que, al informar la conducta humana, tienden a destruir parcial o totalmente, el orden de cosas predominante en aquel momento. Para Mannheim, entre la utopía y el orden social existente se produce una correlación de carácter "dialéctico": cada época permite la aparición de aquellas ideas y valores en los que están contenidas, en forma condensada, las tendencias no realizadas y no consumadas, que representan las necesidades de esa época; esos elementos intelectuales, a su vez, se convierten luego en los detonadores que hacen estallar los límites del orden existente. El criterio que permite deslindar lo utópico de lo ideológico en la mentalidad de una

14. Karl Mannheim, *Ideología y Utopía,* ediciones Aguilar, Madrid 1966.

época determinada es el de su realización. Las ideas que resultaron representaciones falsas de un orden social pasado o potencial, fueron ideológicas. Aquéllas que fueron realizadas en el orden social subsecuente fueron utopías relativas: "El grado en el que las ideas se realizan constituye una norma suplementaria y retroactiva para diferenciar hechos que, cuando son contemporáneos, se encuentran enterrados bajo los conflictos de las opiniones partidistas".[15]

El pensamiento utópico de los años veinte, como todo fenómeno político histórico concreto, estuvo inextricablemente ligado a la posición de sus autores, a sus ideales, conocimientos relativos, prejuicios y pasiones. Haya y Mariátegui y los programas del partido socialista y del partido aprista fueron sus mejores expresiones.

Cincuenta años después, el análisis de la evolución económica, social y política del país evidencia el valor utópico de su pensamiento y de sus luchas. Durante el prolongado período que transcurre entre los años finales de la década del veinte y el inicio de la revolución peruana se desarrolló el Estado oligárquico. Durante esa época, los sucesivos gobiernos militares y las pocas experiencias de una democracia formal y excluyente reforzaron la presencia en el poder de una pequeña minoría que asociada con el estamento gerencial extranjero robusteció la presencia de los enclaves extranjeros, favoreció el creciente despojo de la propiedad campesina e intentó neutralizar, por todos los medios, la acción transformadora de las clases populares y sus instituciones representativas, sindicatos y partidos. Pero, ésta es una de las caras de la medalla. La otra es la historia de las luchas populares: el largo proceso de organización de obreros y campesinos, artesanos, intelectuales y estudiantes en torno a la causa de la transformación del país y por la destrucción de la sociedad oligárquica sujeta a los intereses y presiones del imperialismo. La entrega a esta causa fue animada principalmente por esa corriente de pensamiento en la que se

15. Ibid, pág. 275.

distinguen nítidamente Mariátegui y Haya. Los planteamientos centrales de sus obras, recogidos en los programas partidarios, mantendrán una clara vigencia hasta 1968. En este año se iniciará en el Perú un proceso de cambios estructurales. Por un camino para muchos inédito e insólito por ser conducido por una élite militar, se realizará un conjunto de transformaciones definidamente antioligárquicas y antiimperialistas que responderá y cumplirá, en buena medida, muchas de las reivindicaciones y previsiones contenidas en el visionario pensamiento de los años 20.

Es necesario indicar que en el plano de la lucha política concreta, la presencia aprista tendrá una gran significación hasta mediados de la década del cincuenta. Posteriormente surgirán nuevos partidos de centro y de izquierda (Acción Popular, Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista) que renovarán la vida política nacional mientras las organizaciones marxistas ampliarán el ámbito de su influencia y participación. La Democracia Cristiana y el Social Progresismo a pesar de su reducida militancia cumplirán un importante papel en la formación de cuadros técnicos y el enriquecimiento del debate y los programas partidarios. Gracias a ellos, los temas de la autogestión, de la cogestión y de la democracia interna en las organizaciones, son incorporados al debate político nacional.

5. *EL PROCESO DEL ESTADO OLIGARQUICO*

Entre los años finales de la década del 20 y la década del 60, es decir, durante la vigencia del Estado oligárquico en la sociedad peruana se produjeron profundas transformaciones. Pero ellas no fueron consecuencia principal de la acción de los gobiernos sino, más bien, fruto de un intenso proceso de modernización que se estructura como el proceso de transición entre una sociedad predominantemente agrario-minera a una sociedad urbano-industrial.

La evolución del capitalismo dependiente tardío se expresa en el crecimiento del sector moderno: el incremento de las migraciones, la intensificación de los procesos de urbanización, de

industrialización y de expansión del aparato estatal y los medios de comunicación masiva. Este proceso se articula por dos tipos de dinamismos. Uno que se impone desde fuera hacia adentro y mediante el cual los factores externos inducen, condicionan y regulan el cambio por la vía de la transferencia de capital, de agentes humanos, de tecnologías e ideologías. Y otro, más bien endógeno, que es la resultante del proceso de lucha y conflicto entre las clases medias y populares y los grupos dominantes asociados con los intereses foráneos.

La oligarquía peruana

Durante esa época, en la cúspide de la pirámide social, se afirmó y mantuvo un conjunto de grupos sociales que, constituyendo una pequeña minoría, durante largos años y en estrecha asociación con los intereses imperialistas manejó el país directamente o a través de intermediarios civiles y militares. Hasta mediados de la década de los años 50 la fracción hegemónica estuvo constituida por el grupo agro-exportador más ligado hasta ese momento a los inversionistas extranjeros y responsables de más de un 40% del total de divisas generado por los distintos sectores que producían para la exportación. Este grupo mantuvo su asociación con el sector latifundista —más retrasado— y cuya importancia para el sostenimiento del sistema, desde los años 30 fue más bien política que económica. También desde los años 30, la fracción agro-exportadora estuvo estrechamente asociada con el pequeño grupo industrial. Este iría progresivamente ampliando su base económica sobre todo en los años 60 y 70 en que la inversión extranjera, principalmente la proveniente de las grandes empresas norteamericanas, diversificará su orientación canalizándola hacia la industria manufacturera aunque, siempre tanto en términos absolutos como relativos, en menor proporción que a la inversión minera. Como ha señalado Bourricaud,[16] los representantes de estos grupos se encuentran también en las empresas mineras, si bien en este caso en una posi-

16. François Bourricaud, "Remarques sur l'oligarchie perouvienne", en *Revue Française de Science Politique,* Vol. 4, Paris 1964.

ción claramente secundaria, pero manteniendo el control de los mecanismos de crédito y financiamiento y de los medios de comunicación de masas: prensa escrita, radio y televisión.

A partir de esta base económica y con el apoyo de la fuerza armada —por lo menos hasta 1956— estos grupos consiguieron controlar la marcha de los asuntos políticos y en la práctica hasta 1968 lograron mantener, con una extraordinaria habilidad negociadora y corruptora, casi la totalidad de sus posiciones y privilegios.

La diversificación de la dependencia

En este período el eje de la dominación imperialista se extiende "de los tradicionales 'enclaves' minero-petroleros, bajo su control directo, y de los enclaves agropecuarios, cuyo control compartía con la burguesía terrateniente, hacia la producción industrial urbana. Y sin que eso signifique, desde luego, que abandone los sectores tradicionales de su penetración, refuerza su control financiero-mercantil sobre los nuevos".[17]

En el Perú, los grupos económicos locales no pudieron mantener su control o predominio sobre el sector productivo. En algunos casos, los sectores económicos controlados nacionalmente fueron paulatinamente desplazados por su incapacidad para reaccionar y competir en la producción de mercancías que exigían condiciones técnicas, sistemas de comercialización y capitales de gran importancia (Casagrande, Cerro de Pasco C. C.). Pero también se dieron situaciones en las cuales el proceso de formación de enclaves se desarrolló directamente en función de la expansión de las economías centrales (Marcona, Toquepala, etc.). En los dos casos, sin embargo, el desarrollo económico basado en enclaves pasa a expresar el dinamismo de las economías centrales y el carácter que el capitalismo asume en ellas con independencia de la iniciativa de los grupos locales.[18]

17. Aníbal Quijano, *Naturaleza, situación y tendencias de la sociedad peruana contemporánea,* CESO, Santiago de Chile, 1967.

18. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina,* Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974.

De este modo, la situación de dependencia del país se refuerza y diversifica en una etapa de desarrollo del capitalismo en la cual las decisiones que orientan su expansión responden a la estrategia de las grandes corporaciones multinacionales. Sectores estratégicos de la producción nacional constituyen una prolongación directa de la economía de los Estados Unidos. El control de las decisiones, en importante medida, depende del exterior y los beneficios generados van a incrementar el capital de la economía hegemónica.

El poder económico adquirido por los representantes del capital extranjero se tradujo en un apreciable grado de influencia política, que por la vía de su alianza con los grupos oligárquicos —alianza que contó con el apoyo de las fuerzas armadas— hizo posible el mantenimiento de las políticas y decisiones más favorables para el mantenimiento de sus intereses. De este modo, el Perú permaneció como uno de los países más retrasados de América Latina en lo que se refiere a la implementación de políticas correctivas que impidieran la descapitalización y posibilitaran un mayor control nacional de la producción.

Esta situación fue también mantenida y reforzada por la acción exterior del gobierno de los Estados Unidos. La política externa de este gobierno estuvo permanentemente orientada por dos grandes objetivos, uno de carácter principalmente económico, el otro de naturaleza fundamentalmente política.[19] Según el primero, la estrategia económica de "la república imperial se identifica con los intereses y acciones de las grandes empresas multinacionales, convertidas en elemento esencial del mercado mundial. Concretamente en el caso del Perú —y en general en América Latina—, según la doctrina tantas veces repetida, las empresas privadas norteamericanas deben jugar un papel básico en la promoción del desarrollo y en consecuencia la política de "ayuda" de los Estados Unidos debe realizarse prioritaria-

19. Celso Furtado, *La hegemonía de los Estados Unidos y el futuro de América Latina, en la Dominación de América Latina,* Francisco Moncloa ed., Lima, 1968. Raymond Aron, *La República Imperial,* EMECE ed., Buenos Aires, 1974.

mente a través de esas empresas. De acuerdo al segundo, la seguridad de los Estados Unidos implica la contención del comunismo. En función de ese objetivo estratégico, debe impedirse que lleguen al poder fuerzas o grupos que simpaticen con el marxismo o que faciliten a los "comunistas" –concepto que desde esta perspectiva tienen un rango significativo muy amplio– su instalación en el poder". Por estas razones, los Estados Unidos favorecen los gobiernos que mantienen el statu quo y no rechazan su ideología oficial. En suma, prefieren los regímenes de derecha y sabotean e "interfieren" los intentos de transformación: Guatemala, República Dominicana y Chile constituyen clarísimos ejemplos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la política exterior de los Estados Unidos con relación al Perú tuvo como una de sus tareas principales el adoctrinamiento, adiestramiento y equipamiento de las fuerzas armadas. Todo ello no estuvo motivado únicamente por la necesidad de preparar un ejército profesional que fuera suficientemente eficaz para el cumplimiento de las acciones de contrainsurgencia. Estudios ordenados por el propio Departamento de Estado o por otras reparticiones oficiales u oficiosas demuestran palmariamente la conciencia de que los militares latinoamericanos fueron casi siempre gobernantes potenciales o de facto. En consecuencia, aplicando la experiencia de la historia política de nuestros países, los Estados Unidos estrecharon su acercamiento a las fuerzas armadas.

Su ingerencia sobre la política internacional contribuyó de manera decisiva a frustrar el desarrollo autónomo de la diplomacia peruana. Con muy pocas excepciones –la defensa de las 200 millas de mar territorial iniciada por el gobierno de Bustamante y Rivero o la personal posición de Raúl Porras Barrenechea en la reunión de la OEA en que fuera expulsada Cuba–, por la acción de sucesivos gobiernos el Perú apareció en el marco de la guerra fría, como un sumiso seguidor de la política bloquista de los Estados Unidos. Aislados del mundo socialista y ausentes de las luchas de liberación de los países coloniales y subdesarrollados, la política exterior del país significó muy po-

co más que un voto en favor de las posiciones norteamericanas en los distintos foros y organizaciones internacionales.

Pero la influencia externa tampoco fue desdeñable en el campo de la cultura. Su asociación con los grupos oligárquicos que controlaban los grandes diarios, la radio y la televisión, posibilitó la manipulación de los medios de comunicación de masa, la desinformación y tergiversación de los problemas de los países del tercer mundo y la persistente y a veces sutil campaña de propaganda del "modelo de vida norteamericano". También fue importante su influencia a través de la formación de élites, el asesoramiento de programas gubernamentales y el control de las políticas económicas mediante organismos como el FMI y el BID.

Recomposición de la estructura social

La transición de una economía predominantemente agrario-minera hacia una economía urbano-industrial implicó el desplazamiento progresivo de las actividades agrícolas por las actividades primarias más industrializadas (Pesquería y Minería) y por las actividades secundarias y terciarias (industria, comercio y servicios). En este contexto se realiza una recomposición de la estructura social.

Sin duda, la vieja clase terrateniente serrana estaba, hacia los 60, seriamente disminuida por el embate de las luchas campesinas. Pero en la clase dominante, junto a los tradicionales sectores que controlaban la agricultura costeña de exportación y los mecanismos de crédito, financiamiento y comercio exterior tendía a consolidarse un grupo industrial estrechamente vinculado a la inversión externa. Estos últimos grupos no presentaban un frente monolítico, pero sus intereses estaban estrechamente imbrincados y sus tensiones internas parecen haber girado alrededor de las políticas monetaria, crediticia y de comercio exterior pero sin que llegaran a producirse conflictos abiertos y de relativa permanencia.

Se produce también un desarrollo significativo de las clases medias sobre todo en el sector urbano. Contribuyó a ello la

expansión de la administración pública, el incremento de las actividades comerciales y de servicios, el crecimiento de los mandos medios en el sector manufacturero, la ampliación del sistema educativo, etc. En las clases populares se realiza un crecimiento sustantivo de la población obrera fabril, minera y del trabajador agrícola asalariado en las haciendas de la costa y en menor medida, en los latifundios y medianas propiedades de la sierra, incrementándose también la población sub-ocupada y desocupada como consecuencia del intenso ritmo del crecimiento demográfico, los aluviones migratorios hacia los centros urbanos y la oferta cada vez más amplia de mano de obra no calificada en un mercado de trabajo de tendencia restrictiva.

El movimiento campesino

A partir de los años 50 es posible reconocer la emergencia de un movimiento campesino que presenta un grado apreciable de organización y una presencia importante en amplias zonas de la costa y de la sierra. Tratándose de un movimiento que se estructura en un proceso de desarrollo desigual y combinado, su base social está constituida por una población complejamente diferenciada.

Aníbal Quijano,[20] considerando criterios culturales, socioeconómicos y los diferentes niveles de modernización alcanzado por las distintas zonas y regiones presenta un cuadro interesante de los sectores campesinos que participan en el movimiento: siervos y semi-siervos de las haciendas tradicionales de la sierra, jornaleros agrícolas de la sierra, minifundiarios de la sierra, miembros de las "comunidades indígenas –que aunque fundamentalmente minifundiarios– forman un grupo aparte por la naturaleza especial de sus organizaciones y tradiciones colectivas, yanaconas y jornaleros agrícolas de las haciendas no industrializadas de la costa y trabajadores asalariados de las haciendas industrializadas de la costa. Estos subsectores de la población campesina ordenados en función de criterios socio-econó-

20. Aníbal Quijano, "El movimiento Campesino peruano y sus líderes", en *América Latina,* Año VIII, Nº 4, octubre-diciembre 1965.

micos son atravesados por diferencias culturales que permiten distinguir entre ellos tres grupos fundamentales: los indígenas, los cholos y los criollos: "Los indígenas forman el sector que participa en un mundo cultural formado en gran parte sobre la base de la cultura prehispánica, notablemente modificados con la incorporación de elementos de la cultura hispánica tradicional en la colonia, y otros de procedencia occidental posterior, todos ellos grandemente modificados y reinterpretados. Habitan en toda la sierra, pero básicamente, en los departamentos de la sierra del sur y del centro, mientras que en las otras zonas su densidad no es muy grande". Según Quijano "Los cholos integran una capa creciente y en emergencia, que se desprende de la masa indígena y que se caracteriza porque su mundo cultural va siendo integrado con elementos provenientes de la cultura indígena y al mismo tiempo por otros provenientes de la cultura occidental criolla, aunque en su gran parte se mantiene bajo la capa de influencia de la cultura indígena, lo cual no obstante, varía de región a región. Habitan en la sierra y en la costa, tanto en el campo como en las ciudades a donde han migrado recientemente, y son de una extrema movilidad geográfica". Los criollos, más bien, "son el sector de la población que participa tradicionalmente de la cultura occidental o de su versión nacional, o que se han aculturado definitivamente ya sea por los medios de la exposición extensa y prolongada a la influencia urbana, o por su apartamiento geográfico de la vecindad y la influencia de la cultura indígena. Por esta razón los criollos habitan, fundamentalmente, en la costa".[21] La movilización política de los años treinta, fue canalizada principalmente por el partido aprista y se orientó, fundamentalmente, a la organización de los campesinos asalariados de las haciendas arroceras, algodoneras y azucareras de la costa donde había sido más profunda la expansión capitalista. A diferencia de ella, pero también de las antiguas revueltas campesinas que por su aislamiento fracasaron al enfrentar un aparato represivo poderoso y centralizado, el movimiento campesino de estos años cubre una parte

21. Ibid.

importante de la sierra y una porción considerable de la agricultura costeña, logrando significativos pasos en el proceso de organización, sin que ello significara una coordinación y vinculación de alcance nacional.

El mismo Quijano ha señalado la tendencia de dichos movimientos hacia la expansión y coordinación y, al mismo tiempo, la construcción de núcleos relativamente independientes del poder oficial y tradicional. Los principales canales de expresión y animación se habrían constituido por la sindicalización, las invasiones de tierra, la competencia de los grupos políticos de izquierda por conseguir el control de las organizaciones o por influir en su desarrollo y la incorporación de campesinos como militantes de esos grupos políticos.

El movimiento de invasiones de tierras de los primeros años de la década del sesenta, adquirió un vigoroso impulso y un amplio desarrollo. Los campesinos exigían la propiedad de la tierra y en muchos casos, la recuperaron. Posiblemente el caso más importante de esta auténtica movilización de masas fue el de la sindicalización de los campesinos en los valles de La Convención y Lares promovido en parte por el Partido Comunista Peruano y también por una de las ramas del trotskismo cuya figura más relevante fue Hugo Blanco. Este movimiento reivindicó muchas veces en forma violenta la propiedad de los medios de producción, cuestionó el sistema de dominación, minó las bases del poder de los terratenientes serranos y abrió el camino de la Reforma Agraria, que después de 1958 sería un punto importante prácticamente en los programas de todos los partidos políticos, evidentemente con muy distintos contenidos e intenciones. La "Reforma Agraria, realizada en los valles de La Convención y Lares por la Junta Militar de gobierno que asumió el poder en 1962, fue la respuesta militar a esta situación".

La sindicalización de los trabajadores agrícolas de las haciendas costeñas tuvo otro origen y una distinta orientación política. En el caso más representativo, el de las haciendas cañeras, el proceso de sindicalización se inició en la primera oleada movilizatoria de los años 30. La organización y control político

corrió a cargo del partido aprista. La naturaleza del conflicto fue también otra. Como ha sostenido Bourricaud,[22] el movimiento sindical orientado y controlado por el Apra no reivindicó la propiedad de la tierra; mucho más integrados al sistema de dominación, su lucha estuvo centrada en la conquista de mayores salarios y mejores condiciones de vida.

En los inicios de la década de los años 60 se había ya producido una amplia y creciente organización del movimiento campesino. Se realizaron varios congresos provinciales y regionales, se establecieron numerosos sindicatos, existían federaciones y centrales provinciales y regionales y dos centrales "nacionales" competían por el control del movimiento campesino: la FENCAP, controlada por el Partido Aprista y cuyo núcleo más consistente estaba en las haciendas industrializadas de la costa norte y la CCDP, bajo la influencia de varios grupos marxistas y con mayor arraigo en algunas provincias serranas del centro y del sur del país. Paralelamente existían sindicatos, también centrales y federaciones locales y provinciales que no pertenecían a ninguna de las dos centrales "nacionales".

El movimiento obrero

Entre los años 30 y mediados de la década del 50 el movimiento obrero estuvo básicamente encuadrado por el Partido Aprista. A fines de los años 50 los trabajadores agrícolas dejan de constituir la mayoría de la población económicamente activa, la manufactura mantiene su proporción dentro de la fuerza de trabajo y crecen notablemente las actividades vinculadas al comercio y los servicios (sector terciario). En la minería la producción aumentó (por el uso de nuevas técnicas) sin mayor crecimiento de los trabajadores.

En esta época tanto los mineros como los petroleros consolidaron sus organizaciones sindicales: en 1959, se organizó la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y

22. François Bourricaud, "Syndicalysme et Politique: le cas perouvien", en *Sociologie du Travail*, número especial, París, 1961.

similares, y hasta 1968 existieron dos federaciones de trabajadores en petróleo, una aprista y la otra socialista. El proletariado pesquero se desarrolla a partir de 1957 por el intenso crecimiento de la industria de harina de pescado y en 1962 se constituyó la Federación de Pescadores del Perú.

Por estos años, después de haber reposado principalmente en dos ramas industriales tradicionales, la textil y la alimenticia, la industria manufacturera acelera su modernización y diversificación.[23] Como consecuencia del desarrollo de la industria metalmecánica en 1957 surge la Federación de Trabajadores Metalúrgicos del Perú (FETIMP) y en 1962 la Federación de Trabajadores de las Industrias Químicas, Petroquímicas y afines y la Federación de Trabajadores en laboratorios, droguerías y afines.

Los trabajadores del sector construcción están agrupados por Comité de Obra, lo que impone una organización transitoria, pero en un nivel superior se encuentran los sindicatos provinciales o departamentales que se establecen en las grandes empresas constructoras. A nivel nacional existen dos federaciones, la primera conocida como la Federación Nacional de la Industria de la Construcción y similares, fundada en 1942, afiliada a la CTP (Confederación de Trabajadores del Perú fundada en 1944) y bajo el control del Apra y la segunda que surge en 1948 y que desde sus orígenes estuvo ligada al Partido Comunista.

Diversos factores pueden contribuir a explicar la debilidad del sindicalismo peruano de estos años: la dispersión de los trabajadores en pequeños centros de trabajo donde no se pueden formar sindicatos (establecimientos con menos de 20 trabajadores y que comprenden cerca del 60% de la fuerza laboral); la existencia de un exceso de mano de obra en el campo y en la ciudad que permite a las empresas usar el despido como arma principal contra los dirigentes sindicales; la ausencia de una direc-

23. Aníbal Quijano, *Naturaleza, Situación, tendencias de la Sociedad Peruana contemporánea,* CESO, Santiago de Chile, 1967.

ción hegemónica; las pugnas internas en las organizaciones sindicales marcadas por el progresivo cuestionamiento del sindicalismo impulsado por el Apra, etc.[24]

En 1956, con el II Congreso de la CTP, en el cual participaron los sindicatos no apristas, el PAP logró recuperar su control sobre la central encontrando fuerte resistencia de una oposición bastante heterogénea: comunistas, trotskistas, independientes, demócrata-cristianos, acciopopulistas. Finalmente, antes de que terminara el congreso, se retiraron varias federaciones.

A partir de 1958 se acentúa la división del movimiento sindical. Se alejaron de la CTP las Federaciones Departamentales de Arequipa, Cusco, Puno, la Unión Sindical de Trabajadores de Lima, la Federación de Construcción Civil y la Federación de Empleados Bancarios. El partido aprista mantuvo su control sobre la Federación de Trabajadores Azucareros, las centrales sindicales de Chiclayo, Trujillo y Chimbote, la Federación Textil, la Central de Empleados Particulares y los sindicatos mineros. Después del golpe militar de 1962 surge el Comité de Reorganización y Unificación Sindical de la CTP que posteriormente tendrá una importante participación en la articulación de los sindicatos antiapristas previa a la creación del Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS) en 1966 y a la constitución de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en junio de 1968.

El movimiento obrero de esa época expresa la naturaleza transicional de la estructura productiva del país.[25] El proletariado industrial urbano está concentrado en las industrias ligeras tradicionales y en una proporción inferior al 50% en los nuevos sectores industriales de productos básicos intermedios. La mayor parte de esta población procede del campo —migración relativamente reciente— y participa de una cultura impregnada

24. La información sobre el movimiento obrero la hemos obtenido principalmente del libro de Denis Sulmont, *Historia del movimiento obrero peruano* (1890-1977).

25. Aníbal Quijano, op. cit, 1967.

de valores rurales. El proceso de organización institucionalizada de sus intereses ha avanzado muy poco, existen amplios sectores obreros no organizados sindicalmente y persisten elementos de "paternalismo" en las relaciones obrero-patronales y en las relaciones entre las organizaciones sindicales y el aparato estatal.

No obstante el surgimiento de nuevos sectores sindicales ligados a actividades industriales más sofisticadas en los que se puede encontrar un desarrollo más rápido y consistente de la conciencia de sus propios intereses, los sectores mayoritarios mantienen su comportamiento tradicional: reivindicaciones sindicales generalmente restringidas al propio sector, orientadas a la obtención de mayores salarios y mejores condiciones de vida en una dinámica de lucha que no cuestiona los fundamentos del sistema, que no reclama ni la propiedad ni la participación en la propiedad de los medios de producción, y que no plantea tampoco el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y en la distribución del excedente económico de la empresa.

El Estado oligárquico y el Apra

Cuando intentábamos describir el surgimiento de una nueva conciencia nacional se relievó la importancia del pensamiento de Haya de la Torre y de la ideología y contenidos programáticos del aprismo. Pero como ya ha sido señalado,[26] en el Perú se desarrolló un pensamiento revolucionario sin revolución. El Partido Aprista Peruano (PAP), definido como un frente de trabajadores manuales e intelectuales, logró constituir un eficiente aparato partidario y pudo encuadrar orgánicamente amplios sectores de las clases medias y populares. En una sociedad de incipiente desarrollo industrial cuyo proletariado fabril era claramente minoritario en relación con el asalariado minero y sobre todo agrícola, el PAP se hizo fuerte en las zonas geográficas donde había sido más profunda la expansión capitalista, fundamentalmente en los centros urbanos más desarrollados, en las

26. Abelardo Villegas, *Reformismo y Revolución en el pensamiento latinoamericano,* Siglo XXI S. A., México, 1972.

haciendas modernas de la costa y en los enclaves mineros. De este modo bloqueó las posibilidades de crecimiento del partido comunista que después de la muerte de Mariátegui, por su rigidez ideológica y la carencia de un liderazgo lúcido y flexible, se vio progresivamente aislado permitiendo de este modo que el PAP se convirtiera largamente en el principal representante político de las clases medias y populares.

Pero el vigoroso surgimiento del Partido Aprista vio cerrado su camino al poder por una alianza entre los grupos económicos dominantes –internos y externos–. Esta alianza pudo mantenerse hasta mediados de la década del 50 gracias al apoyo de las fuerzas armadas. En este largo período, las bases populares del PAP presionaron intensamente por la transformación radical de la sociedad. Se produjeron sucesivos intentos de tomar el poder por medio de las armas algunos de ellos muy importantes (el levantamiento popular de Trujillo en julio de 1932 o el fracasado golpe del 3 de octubre de 1948 que contó con un apreciable apoyo de ciertos sectores de la Marina y la Aviación). Estos enfrentamientos con las fuerzas armadas y el reiterado fracaso de propiciar revueltas militares se tradujeron finalmente en un intenso y muchas veces violento conflicto entre el partido aprista y las fuerzas armadas. Así, los conflictos sociales entre las clases populares y las clases dominantes se tradujeron en un conflicto político entre el PAP y las fuerzas armadas. La oligarquía peruana y el estamento gerencial extranjero continuaron detentando el control del poder político, consiguiendo así el mantenimiento de sus intereses y privilegios sin asumir directamente los costos del conflicto.

Fiel a su prédica electoral, la dirigencia oficial aprista desconoció los intentos subversivos de su militancia. Progresiva y cautelosamente trató de desdibujar su imagen de fuerza política de raigambre marxista, fundamentalmente antioligárquica y antiimperialista: "el Apra no venía a quitar la riqueza a quien la tiene, sino a crearla para quien no la tiene". El deslizamiento del partido hacia la derecha y la profundidad del viraje se harán patentes cuando en 1956, para salir de la clandestinidad, apo-

yará como candidato a la presidencia de la república al Dr. Manuel Prado Ugarteche, y "convivirá" con su gobierno de orientación inobjetablemente pro-oligárquica y pro-imperialista (1956-1962). Este comportamiento regresivo se reafirmará en el fracasado pacto con Odría (1963), su ex-perseguidor, y sobre todo, durante el gobierno de Belaúnde Terry (1963-1968). El reconocimiento del cambio de posición del partido más importante en la vida política peruana en lo que va del siglo, no implica desconocer su aporte a la historia y a la cultura política del país. El heroísmo e indudable sacrificio de la militancia y de muchos de sus dirigentes animó y caracterizó veinticinco años de lucha por la transformación del país.

La significación histórica del Apra no se encuentra únicamente en el avance ideológico y programático y en el fortalecimiento de las organizaciones obreras y campesinas realizado en sus años "aurorales"; se halla también y fundamentalmente en el logro de una organización que supo enraizar en las aspiraciones y anhelos de miles de peruanos, de miles de cholos, pobres y mestizos, de los desposeídos de siempre que por primera vez se identificaron con una institución política y, mucho más que eso, encontraron y asumieron una causa. Por todo ello es doblemente significativo el cambio de posición que Víctor Villanueva calificara como la tragedia de un pueblo y un partido.[27]

El deshielo político

Hasta mediados de la década de los años 60, el partido aprista peruano seguía siendo la primera organización popular del país. La competencia desde la izquierda estaba representada por el Partido Comunista Peruano (PCP) y el Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotskista fundado en 1946 y que tuvo una primera escisión importante diez años después, en 1956, con la creación del Partido Obrero Revolucionario Trotskista. Ambos, el PCP y el POR, con una representatividad claramente minoritaria en relación con el PAP.

27. Víctor Villanueva, *La sublevación aprista del 48*, Editorial Milla Batres, Lima, 1973.

Las fuerzas de derecha no parecen haber considerado durante esta época que el partido fuera el mejor instrumento para la defensa de sus intereses. Las organizaciones que se generaron en los inicios de los 30: la Unión Revolucionaria (UR) o la Alianza Nacional durante el gobierno de Bustamante y Rivero, no fueron en realidad verdaderos partidos que contaran con un proyecto ideológico, un programa de gobierno, un mínimo de estructura y organización de alcance nacional y una base social más o menos estable. Fueron, en realidad, alianzas electorales, frentes de contención antipopulares y antiapristas.

En el estado oligárquico, el sistema de partidos no constituyó la base de sustentación del régimen. Como ha sido antes señalado, hasta 1956, es la alianza entre el poder económico, los grupos oligárquicos, el estamento gerencial extranjero y el poder militar –concentrado en los altos mandos de las fuerzas armadas– lo que sostuvo el sistema de dominación. Entre 1956 y 1968, la alianza entre el poder económico y el partido aprista peruano constituirá la fórmula política que permite el mantenimiento de la estructura de poder. Más allá de las intenciones "tácticas", por su apoyo al gobierno de Prado –"la convivencia" de 1956-1962 –y por su oposición al programa de reformas de la alianza AP-DC (1963-1968) mediante la "coalición" con la Unión Nacional Odriísta, "el partido del pueblo" se constituyó en un factor decisivo para la supervivencia del estado oligárquico hasta la irrupción del gobierno de la fuerza armada en octubre de 1968.

Los nuevos partidos

Como expresión del intenso proceso de cambio social anteriormente bosquejado, pero también como reacción al viraje aprista, y al vacío que se produce en el campo de la izquierda, surgen nuevas organizaciones y partidos políticos: en 1955 se funda el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Nacional de Juventudes Democráticas que apoyará la candidatura de Fernando Belaúnde Terry; en 1956 se forman el Movimiento Social Progresista (MSP), el Partido Acción Popular (AP) y el

Movimiento Democrático Peruano (MDP); en 1959 en la IV Convención del PAP se produce la expulsión de la oposición de izquierda liderada por Luis de la Puente Uceda, grupo que en 1960 formará el Apra Rebelde y que posteriormente (1962) constituirá el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en 1961 surge como organización la Unión Nacional Odriísta (UNO) y aparece también el Frente de Liberación Nacional (FLN), instrumento electoral nucleado por el Partido Comunista Peruano (PCP); en 1962, como fruto de la conjunción de un grupo de ex-militantes del partido comunista y algunos jóvenes estudiantes que hacían sus primeros años de universidad, se funda el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta agrupación en 1963 reemplazará su comando colegiado por una dirección unificada a cargo de Héctor Béjar Rivera.

Los partidos de la derecha

Este agitado período de organización partidaria fue calificado por Bourricaud como una etapa de "deshielo". En él se pone fin al proceso en el cual la dinámica del conflicto político giró básicamente en torno a la oposición entre el partido aprista y la alianza entre el poder económico y el poder militar. De este modo se produce una nueva configuración del sistema de partidos. El partido aprista se desplazará claramente hacia una posición de centro-derecha. La extrema derecha será ocupada por la Unión Nacional Odriísta jefaturada por Manuel Odría —el ex-dictador que gobernara el país entre 1948 y 1956— y por el Movimiento Democrático Peruano presidido por Manuel Prado, ex-presidente de la república (1939-1945) reelegido en 1956. En ambos casos, no se trata de auténticos partidos que respondan a una ideología definida y explicitada como proyecto de una organización política. Tenían ideología en el sentido más amplio de la palabra. Pero ideología de grupo social y no de partido político: un conjunto de ideas esquemáticas y a veces contradictorias e incoherentes —"el socialismo de derecha" de la UNO— estrechamente vinculado a la defensa de sus intereses y a su propia imagen de lo que debería ser el desarrollo capitalista del

país. Los dirigentes, típicos mediadores del poder oligárquico, se sirvieron de ellas para mantener su posición en la cúspide de la estructura de dominación. La defensa irrestricta de la propiedad privada y de las "libertades" de empresas y de prensa, la oposición al desarrollo de las funciones del estado, una amplísima apertura al capital extranjero, una especial preocupación por las políticas monetaria y comercial son algunas de las principales ideas fuerza. La fidelidad de los gobiernos de Odría, Prado, y Belaúnde a estos principios fue muy firme. Las invasiones de tierras de los migrantes serranos en las ciudades de la costa –principalmente en Lima–, cuando afectaron terrenos de importante valor comercial, fueron desalojadas con tanques. En el caso de las invasiones y recuperaciones de tierras en el agro serrano, principalmente del centro y de sur, la represión fue muy violenta y eficiente. Muchos centenares, quizá miles de muertos jalonaron la lucha por la reforma agraria hasta 1968.[28]

Los medios de comunicación en manos de los grupos oligárquicos criticaron y se opusieron a la planificación y al incremento de las funciones económicas del Estado. Trataron de evitar que éstas fueran más allá de la necesaria provisión de los servicios indispensables y del funcionamiento y construcción de la infraestructura física requerida para el desarrollo del sector privado, al mismo tiempo que defendían ardorosamente la "libertad de empresa", "la libertad de prensa", el "libre cambio". Posiblemente, la política económica diseñada e iniciada por Manuel Ulloa (1968), de haber podido desarrollarse, hubiera sido un importante factor de modernización, desde una óptica estrictamente imperialista, es decir, bajo la pantalla de la "teoría de las ventajas comparativas". Los beneficios de la apertura total al financiamiento y la inversión extranjera y la desprotección de la industria para hacerla más competitiva, hubieran sentado las bases de la taywanización del país.

Desde el punto de vista organizativo, tanto la UNO como el MDP carecían de estructura orgánica y auténtica vida y mili-

28. Wilfredo Kapsoli, *Los Movimientos Campesinos en el Perú*, Delva Ed., Lima, 1977.

tancia partidaria. Eran, en realidad, organismos electorales que agruparon a ciertos notables limeños y a los caciques y gamonales provincianos, todos ellos, expresión inequívoca de la relación particularista, del clientelismo y el arribismo. La UNO en las elecciones de 1962 y 1963 alcanzó un importante respaldo electoral. En las elecciones para elegir los representantes a la Asamblea Constituyente realizada en junio de 1978, tanto la UNO como el MDP obtuvieron únicamente un 2% de la votación. Y, finalmente, en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1980 desaparecieron del mapa político.

Acción Popular

En 1955, en torno a la figura de Fernando Belaúnde Terry se forma el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, cuya participación en las elecciones de 1956 ganada en las calles de Lima, obtendrá una alta y significativa votación: 34.58% contra un 42.87% de Manuel Prado quien contó con el apoyo del PAP.

En el mismo año de realización de los comicios, se funda el Partido Acción Popular (AP). Después de 25 años de la fundación del partido aprista, el núcleo gestor de AP enfrentará en la tarea de construcción partidaria una realidad distinta. El país ha cambiado, se ha modernizado. El reclutamiento de su dirigencia se orientará hacia las capas superiores de la clase media: profesionales de renombre (sobre todo arquitectos, ingenieros, médicos) pequeños y medianos propietarios. La militancia y el electorado se encontrará principalmente en las clases medias y populares representativas de lo que se ha llamado la oleada movilizatoria de los años 50, es decir, grupos y sectores sociales que surgen a la vida política con posterioridad al nacimiento y desarrollo del PAP. Se trata de un típico partido populista: un líder carismático que gozará desde el inicio de una gran simpatía en los medios populares; un planteamiento ideológico difuso que predica un nacionalismo "peruano" y que busca enraizarse en el "socialismo incaico" y su "tradición planificadora"; un programa de moderadas reformas que aspira, dentro del capitalismo, a la modernización del país y a una cierta re-

distribución del ingreso. Se propone también, el logro del desarrollo económico: la reforma agraria y la implementación de nuevas políticas de industrialización, crédito, seguridad social, salubridad, vivienda, descentralización, educación, integración latinoamericana, etc. Como señala Bourricaud.

> "La evocación de las tareas muy generales que él propone con mucha prudencia pueden provocar entusiasmo o escepticismo. Pero él no ataca de frente ningún interés, no choca ninguna convicción. En el fondo, Belaúnde toma la posición según la cual, el proceso de movilización puede, si es adecuadamente controlado, conducir si no a una inclusión total e inmediata por lo menos a una recuperación en la comunidad política de los marginales y los recién llegados, sin que las categorías dirigentes tengan que sufrir una destitución, aún si algunas de éstas deben consentir ciertos sacrificios".[29]

Según el propio Bourricaud, Belaúnde no encontrará los enormes obstáculos que tuvo el PAP. Las reformas son cada vez más admitidas, las fuerzas armadas ven con simpatía el nuevo partido y esto le permitirá dar a su mensaje un cierto carácter consensual. La presentación de los diez temas del ideario del partido, "el Perú como doctrina", pueden ayudar a comprender el estilo y la posición ideológica de Acción Popular: la emancipación alimentaria; agua y tierra, binomio de reforma; la emancipación de los villorrios; de la improvisación al planeamiento; la defensa del capital humano; la educación al encuentro del educando y la conquista del Perú por los peruanos.[30]

Desde el punto de vista organizativo, AP presentará también características muy diferentes a las del partido aprista. Su estructura reposará primordialmente en una organización de base

29. François Bourricaud, "Les régles de jeu en situation d'anomie: le cas perouvien", en *Sociologie du Travail,* julio-setiembre, 1967, p. 329-351.
30. Véase: Martínez, G. *"Ideario y Plan de Gobierno de los Partidos Políticos"*. Lima, 1962.

territorial —comités departamentales, provinciales y distritales— carente de grupos funcionales, sólidos y verdaderamente enraizados en las organizaciones obreras, campesinas y universitarias. Esto, evidentemente, no implica que AP no tuviera un número apreciable de simpatizantes o electores en las poblaciones obrera, campesina y estudiantil.

El nacimiento y desarrollo de Acción Popular constituyó un auténtico espejismo político, y este fenómeno estuvo directamente ligado al viraje del partido aprista. Belaúnde —anteriormente diputado en el período de Bustamante y elegido con votos apristas— irrumpe en el primer plano de la vida política, precisamente en el momento en que el PAP explicitaba su cambio de posición. Su imagen aparece asociada a un sentimiento colectivo de cambio. Su proyecto —aunque él no lo definiera así— es percibido como la posibilidad, mucho tiempo postergada, de un proyecto nacional y generacional de transformación profunda del país. Su discurso político, más brillante que conceptuoso, la predilección por los gestos espectaculares y románticos, una cierta audacia en la maniobra electoral y una innegable simpatía personal, ocultaron para la gran mayoría de sus correligionarios y electores su excesiva proclividad al compromiso y la negociación, su rechazo al enfrentamiento, una relativamente pobre convicción sobre la necesidad de los cambios propuestos y, sobre todo, la imprevisión y renuencia para asumir los costos y sacrificios que implicaba el efectivo cumplimiento de las reformas prometidas.

Acción Popular obtuvo óptimos resultados electorales. Desde el inicio se situó como una de las más importantes fuerzas políticas del país. Su desarrollo estrechó enormemente las posibilidades de crecimiento de la Democracia Cristiana y del Movimiento Social Progresista (MSP). Sería permisible, teniendo en cuenta la existencia de muy importantes diferencias, hacer una analogía entre el desarrollo del partido aprista y el limitado desarrollo del partido comunista y la similar correlación entre el surgimiento y posterior desenvolvimiento de AP, la DC y el MSP.

Pero lo que nos interesa destacar especialmente —por eso la referencia al espejismo—, es que AP es percibido en sus primeros años como un partido de izquierda moderada y reformista, pero izquierda al fin. ¿Lo fue efectivamente? ¿la convicción reformista estaba presente sólo en una pequeña fracción de su dirigencia y en una proporción imponderable de su electorado? No se puede juzgar sobre las intenciones. Lo que es objetivamente verificable es que la responsabilidad de gobierno sobre las políticas implementadas y los problemas soslayados entre 1964 y 1968 sitúan a AP en el campo de la derecha. Después de 1968, su posición frente a un proceso de cambio radical, evitará toda duda. Acción Popular asumirá la defensa del statu quo, vale decir, de los intereses oligárquicos e imperialistas. Inclusive desde una posición más dura que la del PAP. Una de las primeras consecuencias esclarecedoras de la revolución que se inició en el Perú en 1968, fue hacer evidente que frente a los problemas históricos del desarrollo nacional —la reforma agraria, la lucha antiimperialista, el fortalecimiento del estado, la participación de los trabajadores en sus empresas— las posiciones de AP eran más conservadoras que las del Apra. Más aún, Acción Popular ya no estaba más a la izquierda del Apra; ni en su imagen, ni en su comportamiento.

La nueva izquierda

Se había señalado que en 1960 aparece el Apra Rebelde, que en 1962 constituirá el MIR y que ese mismo año aparece el Ejército de Liberación Nacional y se producirá una reanimación en la expansión y crecimiento de la izquierda marxista, por muchos años encauzada únicamente por el partido comunista y las dos facciones de trotskismo (POR y POR-T).

Para el análisis de este período debe tenerse en cuenta las consecuencias del viraje aprista y la influencia de fenómenos tales como la crítica del stalinismo iniciada por Krutchev en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS y el triunfo de la revolución cubana, que modificó las concepciones tradicionales sobre la revolución en los países no industrializados. En

consecuencia, el PAP y el PCP fueron los más afectados por el surgimiento de esta "nueva izquierda".[31] Grupos disidentes de ambas organizaciones estuvieron en la conformación inicial del MIR y del ELN. La izquierda "tradicional" estaría constituida por el PCP, los antiguos partidos trotskistas –distinguiéndose de ellos el trabajo de Hugo Blanco– y el muy pequeño partido socialista jefaturado por Luciano Castillo (0.99% en las elecciones de 1962).

Según Béjar, la nueva izquierda tenía como características más importantes: la negación de la posibilidad de ascenso pacífico al poder político para los grupos revolucionarios; la reivindicación de la conciencia popular; la revalorización del papel del campesinado en la primera fase de la revolución; el repudio de la acción de los partidos tradicionales, principalmente del PAP y el PCP.

Ni el MIR, ni el ELN, lograron atraer a sus filas a un número importante de la militancia de sus partidos de origen, aunque debe destacarse que en la formación del ELN, participó tanto un grupo de ex-militantes del PCP, como un grupo de jóvenes cuadros políticos que hacían sus primeros años de estudios universitarios. En lo que concierne a proyectos ideológicos y programas partidarios, los planteamientos de ambas organizaciones no fueron muy sofisticados. Deslumbrados por la experiencia cubana, sobrevalorando sus propias posibilidades, minimizaron el real poderío de sus adversarios sin llegar siquiera a unificar en un comando integrado la dirección de los frentes de lucha. En julio de 1965 se inició la guerrilla del MIR en Mesa Pelada (Dpto. del Cusco) y en la provincia de Concepción (Dpto. de Junín), en la Provincia de La Mar (Dpto. de Ayacucho) comenzó sus operaciones el ELN. Encabezaban los grupos De la Puente y Lobatón por el MIR y Héctor Béjar por el ELN.[32]

31. Héctor Béjar, *Perú 1965: Una experiencia guerrillera*, Campodónico Ediciones S.A. Lima, 1969.

32. En 1963 el ELN intentó una primera experiencia que fracasó con la muerte del joven poeta Javier Heraud y el apresamiento de Alaín Elías, Abraham Lama y Edilberto Márquez en Puerto Maldonado. En 1965, el MIR formó un grupo en la sierra de Piura, encabezado por Fernández Gasco. Pero este grupo no entró en combate.

En el comienzo de las acciones guerrilleras, el gobierno de Belaúnde pretendió ignorar y minimizar el problema calificándolo como simple abigeato. Después, ante la renuencia inicial del ejército, la Guardia Civil asumió las tareas de la contrainsurgencia. Constatada la existencia de varios frentes y la incapacidad de la policía de resolver el problema y ante la presión del Apra y de la derecha económica el ejército inició la represión de los focos guerrilleros de acuerdo a sus propias condiciones. En pocos meses la guerrilla fue vencida. Aún soslayando el problema de su viabilidad, en términos de eficacia inmediata, las guerrillas de 1965 adolecieron de muy serias deficiencias en su concepción, preparación y desarrollo. Pero, tuvieron un gran impacto que fue consecuencia de la dimensión moral, del compromiso heróico de algunas docenas de estudiantes y trabajadores. En un clima político signado por el retroceso aprista, por la mediocridad del gobierno de Belaúnde, por la rigidez y falta de iniciativa del partido comunista, el sacrificio de De la Puente, Lobatón, Heraud, Velando y los largos años de prisión de Béjar, Blanco, Palacios, Fernández Gasco, Gadea, Portocarrero y tantos otros, marcó a fuego a las nuevas generaciones que se sumaban a la lucha por la revolución peruana.

El proceso de las invasiones campesinas y la experiencia guerrillera, testimonios de una profunda convicción transformadora llevada a la práctica mediante una entrega que asumió todos sus costos y riesgos, devolvió a la izquierda peruana, la autenticidad y la fuerza perdida en 1956. De este modo, los primeros años de la década del 60, consituirán para ella un nuevo punto de partida. Por primera vez, el ideal de la revolución social, del "todo o nada", encarnó en un proyecto de acción directa que cuestionaba ya no el gobierno sino el sistema. Sus consecuencias no afectaron únicamente a quienes luchaban por el cambio. También la derecha sintió el remezón de la estructura en que reposaban sus privilegios, pero ello no se tradujo en un cambio de política que abriera algunas válvulas de escape a la presión por tanto tiempo contenida.

La fuerza armada, responsable directa de la liquidación de los focos guerrilleros, sufrió el impacto de esta experiencia excepcional. Después del conflicto bélico con el Ecuador en 1941, los soldados volvieron a empuñar las armas, pero, esta vez, dispararon contra peruanos, muchos de ellos muy jóvenes, que luchaban por la justicia social y por una patria más digna para todos. Este enfrentamiento fue un factor decisivo para el cambio de posición de muchos de los altos mandos del ejército, para su toma de conciencia acerca del rol histórico que podían jugar los institutos armados y, finalmente, para la decisión de romper con la antigua tradición que los convirtió en "el perro guardián de la oligarquía".

La Democracia Cristiana

La Democracia Cristiana nace como el típico partido de cuadros de orientación centrista y militancia de clase media. La escisión del ala derecha del partido que en 1967 dará origen al Partido Popular Cristiano (PPC) liderado por Luis Bedoya Reyes lo debilitará y desplazará hacia una posición de centro izquierda. Héctor Cornejo Chávez, el más brillante parlamentario de las últimas décadas, será el líder de la agrupación. Su desarrollo posterior seguirá la orientación de su base social inicial: partido de profesionales liberales y técnicos, funcionarios de todos los niveles, algunos notables provincianos y pequeños propietarios, base obrera muy reducida y vinculada al Movimiento Sindical Cristiano (MOSIC), organización campesina muy pobre y un interesante trabajo universitario.[33]

33. Entre los años 58 y 63, en muchas de las más importantes universidades del país, durante varios períodos la dirección de las federaciones estuvo a cargo de dirigentes juveniles de la DC. En la Universidad del Cusco: Valentín Paniagua y José Tamayo; en Arequipa: Jorge Bolaños, Róger Cáceres, Arturo Bouroncle, Paredes; en la Universidad Nacional de Ingeniería: Oscar Espinoza, Rodolfo Elmore, Ernesto Amans, Carlos Leca; en la Universidad Agraria: Jaime Llosa; en la Universidad Católica de Lima: Alfonso Cobián, Constantino Urday, Agustín Figueroa, Jaime Montoya, Rafael Roncagliolo, Henry Pease, Manuel Bernales, Armando Zolezzi, Javier de Belaúnde, José María Salcedo.

El movimiento universitario

Entre 1957 y 1958, luego del apoyo al gobierno de Manuel Prado y después de un largo período en el que mantuvo la dirección del movimiento universitario, el PAP perdió prácticamente todas las federaciones estudiantiles del país. El último presidente aprista de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) fue Carlos Enrique Melgar. El primer presidente de la FEP, una vez terminada la hegemonía aprista fue el dirigente demócrata cristiano Oscar Espinoza Bedoya, entonces presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Ingeniería (ACUNI), elegido en 1959 en el Congreso de Trujillo.

A partir de 1960, y con el enorme impulso de la revolución cubana, la preponderancia en el control del movimiento universitario será detentado por el movimiento marxista. Hasta 1963 éste se organizó en base a los frentes estudiantiles revolucionarios (FER) estructurados y controlados por la juventud comunista peruana. La política desarrollada por el PCP, antes de la separación de los grupos que se autodenominaron como "chinos" o pequineses (1964), fue de ancha base. Trataron de encuadrar el grueso del movimiento universitario. Este objetivo fue logrado sólo parcialmente. Después de Espinoza Bedoya se sucedieron en la FEP los candidatos apoyados por la juventud comunista: Max Hernández, Walter Palacios y Gustavo Espinoza. De ellos únicamente Gustavo Espinoza pertenecía a los registros del PCP y fue elegido en 1963, en el Congreso de Huamanga, último encuentro de la FEP en que con representación orgánica de todas las universidades se eligió el máximo representante de los estudiantes del Perú.

Por estos años, se reestructura el movimiento estudiantil, adquiriendo mayor diversidad, fuerza y representatividad. La apertura del gobierno de Prado ofrecía mejores condiciones para la organización estudiantil que el oscuro y represivo gobierno de Odría. El crecimiento de la población universitaria, el surgimiento de los nuevos partidos y su esfuerzo por contar con bases estudiantiles propias, el crecimiento de los grupos mar-

xistas, potenciando por la revolución cubana, así como el inicio del contacto con organizaciones obreras, campesinas y de los barrios marginales, posibilitó el desarrollo de un rico movimiento estudiantil que llenaba calles y plazas con sus marchas y llegó a derribar ministros, manteniendo su organización representativa en forma unitaria.

En esta época germinaron dos líneas y dos estilos de comportamiento en los grupos políticos universitarios que, como en el caso de las organizaciones campesinas y obreras, estuvieron estrechamente asociados al núcleo partidario que las orientaba. Un grupo importante, pero muy minoritario, asumió a plenitud el compromiso con la guerra revolucionaria y la guerrilla (Javier Heraud, Héctor Béjar, Abraham Lama, Walter Palacios, Alaín Elías, etc., es decir, los dirigentes y militantes universitarios que lucharon en el MIR y en el ELN). Otros, permanecieron en el juego político universitario tradicional: exigiendo reformas, solidarizándose con las reivindicaciones de los trabajadores, reclamando mayores rentas para la universidad, en algunos casos con una mayor inquietud política, en otros, dedicando su esfuerzo a tareas más específicamente universitarias.

Después de 1965, en el contexto de la frustración generalizada que el gobierno de Belaúnde causó en el campo de la izquierda, se genera una nueva situación en la política universitaria. Esta se alimenta con el recuerdo de las invasiones de tierras de los inicios de la década del 60 —especialmente del trabajo de Hugo Blanco— y también con la experiencia guerrillera del 65. Para comprenderla es necesario tener en cuenta la acción de los grupos separados del partido comunista (Patria Roja, Bandera Roja, Sendero Luminoso, etc.), la aparición y fraccionamientos sucesivos de Vanguardia Revolucionaria (VR); Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), Partido Comunista Revolucionario (PCR) y la de los distintos grupos que reivindican la representación del MIR después de la liquidación de la guerrilla. Así, aparece una nueva orientación y un nuevo estilo de acción política: semi-clandestino, profundamente ideologizado, contestatario verbal e indiscriminado de todas las acciones políti-

cas que no sean las suyas, proclive en alto grado al debate metafísico, al lenguaje hermético sólo para iniciados, al personalismo y al fraccionalismo frecuentemente practicado. Estos grupos no serán capaces de mantener la unidad del movimiento estudiantil. En no pocas universidades, su radicalismo más bien retórico, el desconocimiento y despreocupación por la investigación y la docencia, aunado a la presión por el ingreso como a la debilitada moral de muchos profesores y autoridades y la carencia de los recursos necesarios desatará una práctica demagógica y matonesca que aún persiste en algunos de nuestros más importantes centros superiores.[34] En algunos casos, los menos, la dirigencia de estos grupos consiguió de alguna manera conciliar su radicalismo político con las exigencias mínimas del trabajo universitario. Dirigentes estudiantiles de esa época animan hoy algunos de los nuevos partidos y unos pocos están presentes en el Parlamento.

La intervención militar de 1962

En los últimos meses del gobierno de Prado, los resultados de las elecciones convocadas para el 10 de junio parecían muy inciertos. Al electorado se le proponían siete candidatos: Haya de la Torre (PAP), Belaúnde Terry (AP), Odría (UNO), Cornejo Chávez (DC), el Gral. Pando Egúsquiza (FLN), Luciano Castillo (PS) y Ruiz Eldredge (MSP). Entre ellos, se consideraban con mayores probabilidades de éxito a Víctor Raúl Haya de la Torre, lanzado por la alianza democrática integrada por el PAP y por el MDP y que se presentaba como candidato apoyado por el gobierno, al arquitecto Fernando Belaúnde, que en las elecciones de 1956 obtuviera una alta votación y al Gral. Manuel A. Odría ex-dictador del Perú entre 1948 y 1956. A los otros aspirantes a la presidencia de la República se les otorgaba muy pocas probabilidades. La imagen renovadora de Belaúnde y la notoria menor fuerza de otras organizaciones situadas a

34. El pequeño libro de Oscar Franco *La Ultima Clase*, es un testimonio desgarrador sobre la política universitaria sanmarquina de esos años.

la izquierda fueron factores que contribuyeron a la aceptación generalizada de la tesis del "voto desperdiciado".

Se ha afirmado con insistencia —y las afirmaciones parecen tener fundamento— que en los altos mandos de los institutos armados existía una seria preocupación por los resultados electorales. Víctor Villanueva sostiene que en el ejército se llevó a cabo una encuesta cuyo cuestionario se refería íntegramente a problemas políticos y estaba orientada a conocer la opinión de los oficiales con relación a determinadas decisiones que podrían exigir el pronunciamiento o la intervención de la fuerza armada. En los medios castrenses, habría habido rechazo frente al Gral. Odría, por el recuerdo, aún fresco, de la corrupción de su gobierno y por el desprestigio que acarrearía al ejército su presencia en el poder. Al mismo tiempo, habría existido una reacción negativa frente al partido aprista, no solamente por los viejos conflictos que exacerbó la oligarquía desde los años 30, sino también por la presunción de que un gobierno aprista en alianza con los grupos oligárquicos no hubiera producido las reformas que la fuerza armada —en pleno proceso de renovación y apertura a los problemas económicos y sociales del país —consideraba necesarios. Según escribe Villanueva:

> "En cambio Belaúnde carece de antecedentes políticos vergonzosos, lo que significa un factor bastante importante para la mente militar tan devota de la moral, procede de la clase media conservadora, origen que constituye cierta garantía de su natural anticomunismo, encubierto y políticamente no declarado. Es un profesional distinguido, un 'técnico' y no un 'ideólogo', circunstancia de gran importancia también para el pragmatismo castrense, propone reformas prácticas y no metas teóricas quizá inalcanzables. Su nacionalismo —conquista del Perú por los peruanos— es de más fácil acceso a la mente militar que las abstrusas ideas importadas. El arquitecto rechaza a la oligarquía tanto como el hombre de uniforme y como éste, teme a los sectores populares por su ascenso revolucionario... El

ejército ha de actuar, pues, en forma pasiva, esperando que se produzca la coyuntura propicia, pero procurando también crearla. La decisión de intervenir habría sido adoptada, salvo el caso que triunfara la candidatura de Belaúnde".[35]

En el Perú, el fraude electoral ha sido un fenómeno recurrente desde los inicios de la República. En los últimos decenios, la fabricación de comicios tuvo aún expresiones grotescas, como lo muestra el caso de la elección como candidato único del Gral. Odría en 1950, después de haber impedido la participación de sus opositores. Debe recordarse, en este sentido, que Odría ejercía el poder desde el 3 de octubre de 1948, fecha en la que mediante un "cuartelazo" tradicional derrocó el gobierno constitucional de Bustamante y Rivero.

En un terreno abonado por las frecuentes experiencias de fraude, la acusación previa o posterior de "voluntad de fraude" ha sido un tema constante en la mayoría de los procesos electorales. Así por ejemplo, en las elecciones de 1931, los apristas no consideraron legítimo los resultados que favorecieron a Sánchez Cerro; y en los últimos comicios –junio de 1978– para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente, el mismo partido, que obtuvo la primera mayoría (36% de los votos válidos), desarrolló una intensa campaña sobre la "voluntad de fraude" que, según ellos, entrañaba el sistema del voto preferencial. Terminada la campaña y obtenido el triunfo desaparecía el problema.

En la campaña de 1962, este comportamiento poco democrático corrió inicialmente a cargo del diario "El Comercio", antiguo y tenaz enemigo del partido aprista. Veamos un texto de dicho diario en su edición del 29 de mayo de 1962: "No hay inconveniente en que la elección se verifique efectivamente el 10 de junio, pues ese día el Gral. Odría o el Arquitecto Belaúnde serán indudablemente elegidos y ello significará que la mayoría indiscutible de esos dos candidados se habrá impuesto a despe-

35. Víctor Villanueva, op. cit, 1973.

cho de todos. En el caso hipotético de que aparezca una mayoría en favor de Haya de la Torre, como ya ha sido probado el fraude aprista, se hará patente la necesidad para todos de proseguir hasta el fin la depuración de los registros electorales antes de proclamar los resultados de la elección". Con anterioridad, en su editorial del 20 de mayo "El Comercio" había ya demandado la intervención de la fuerza armada, alegando que había fraude y que, en consecuencia, el proceso electoral estaba viciado.

Producidas las elecciones y a pesar de que los resultados del Departamento de Lima otorgaban una inesperada mayoría al Gral. Odría (234,242 votos contra 207,850 de Belaúnde y 164,004 de Haya de la Torre), Belaúnde en la misma noche del 10 de junio se proclamó como virtual presidente de la república:

> "Estoy en condiciones de anunciar nuestra victoria definitiva, y con tal ventaja que no será necesario el voto del Congreso para designar al futuro presidente de la República... Depongo la espada de la lucha para ofrecer al gobierno que termina los laureles que merece en *este libre proceso electoral*".[36] (El subrayado es nuestro).

En la segunda quincena de junio "El Comercio" acentuó su campaña sobre el fraude electoral, y a ella se sumó el partido Acción Popular denunciando adulteración de actas de escrutinio, etc. Es evidente que este cambio de comportamiento estaba asociado a la información creciente sobre el triunfo aprista. En los primeros días de julio, se conocía extraoficialmente que los resultados favorecerían a Haya de la Torre, aunque por una diferencia mínima (Haya 558, 237 votos, Belaúnde 543,828 y Odría 481,404). El 4 de julio en un famoso discurso en el que reconoce que su partido ya no representa a la mayoría del país, sino solamente a un tercio del electorado, Haya anuncia que el presidente de la República le había informado que la fuerza ar-

36. Citado en François Bourricaud: *Pouvoir et Société dans le Pérou Contemporain*, Paris, 1967.

mada vetaba su candidatura. Posteriormente intentará salvar el impase negociando con sus adversarios. En primer lugar, se llevan a cabo conversaciones entre representantes del PAP y de AP. Pero éstas fracasan. El 9 de julio, Belaúnde plantea al Jurado Nacional de Elecciones un plazo de tres días para que se pronuncie sobre los recursos de nulidad planteados por su partido y se traslada a Arequipa donde sus partidarios, para presionar al Jurado Electoral —¿y a la fuerza armada?— levantan barricadas en las calles de la ciudad; el humor político llamaría "borricadas" a este típico gesto belaundista. El 17 de julio, Haya anuncia su retiro y, al mismo tiempo, comunica la decisión de su partido de apoyar en el Congreso la candidatura del Gral. Odría. Por segunda vez el PAP realizará un pacto explícito con un antiguo enemigo. En esta ocasión se trata del dictador que encarcelara, deportara e hiciera sucumbir a centenares, quizá miles, de militantes apristas y que mantuviera prisionero al propio Haya de la Torre durante seis años, en la Embajada de Colombia. Pero este pacto no podría ser cumplido: en la madrugada del día 18 se habrá consumado el primer golpe de estado institucional de la fuerza armada.

Un nuevo militarismo

Jorge Basadre en el volumen XIV de su "Historia de la República" califica esta intervención como el más reciente brote del tercer militarismo:

> "El Perú ha tenido tres tipos de militarismo: el primero después de la victoria, en los años que siguieron a la batalla de Ayacucho en 1824 y el segundo después de la derrota cuando terminó la guerra con Chile en 1883 y duró hasta 1895. El tercero surgió bajo la invocación de la defensa social de 1930 a 1939 y fue resucitado en 1948-1956 y con otras características en 1962-1963. Este tercer tipo de militarismo, cuyos atisbos ya aparecieron en 1914, surge del vacío político, ante la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales y frente a los peligros que según se alega, acechan al Es-

tado y a la nación. Las clases socialmente dominantes lejos de enfrentarse a él como lo hicieron en la época agónica del primer militarismo (1872) y en las postrimerías del segundo (1894-1895), lo auspician y se amparan bajo su protección; si bien esta actitud quedó reducida al pasivo conformismo en el más reciente brote de este tercer militarismo (1962-1963)".

Pero, los estudios más recientes sobre la evolución de las fuerzas armadas a partir de la post-guerra, muestran la aparición de una serie de cambios en su organización e ideología que hacen difícil su asimilación al militarismo de los años 30-39 y 48-56. En el mismo sentido, el estilo institucional de toma y ejercicio del poder, tan distinto a las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Odría y el tipo de decisiones asumidas durante su corta gestión gubernamental, evidencian una profunda inflexión en el comportamiento profesional y político de los militares peruanos.

Desde fines de la década de los años 40 los institutos armados estuvieron sometidos a la influencia y presión de contradictorios factores de cambio, externos e internos. En el marco de la guerra fría y, en consecuencia, de la política bloquista, anticomunista y contra-insurgente de los Estados Unidos, se estrecharon las relaciones con este poderoso país, las que se concretarán en la donación, préstamo y compra de material bélico, generalmente obsoleto y en el perfeccionamiento y adiestramiento del personal peruano en las nuevas modalidades de la estrategia y táctica militares, tanto en lo que se refiere a los problemas de la seguridad externa, como a la necesaria prevención contra el "enemigo interno". De este modo, el Perú firmará en 1947 el Pacto de Río de Janeiro que dio origen a la Junta Interamericana de Defensa y al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), uno de los instrumentos más importantes de la estrategia imperialista en su política latinoamericana y, posteriormente, el general Odría y el general Eisenhower firmarán el pacto de ayuda mutua con relación a la defensa hemisférica y la contención del comunismo. Pero el nuevo

profesionalismo militar iniciaría muy pronto el diseño de una política de defensa nacional, que sobrepasa el dominio militar y que aspira a entroncarse con una política de desarrollo nacional.[37]

La importancia del CAEM

En julio de 1950 fue aprobada la Ley Orgánica del Ejército. En ella se define el Centro de Altos Estudios del Ejército (CAE) como "el más alto organismo de estudios de los problemas que atañen o se relacionan con la preparación integral del Ejército y de preparación y selección del Alto Mando de éste". En su artículo 25 se enumeran los fines del CAE: "a) Difundir el conocimiento fundamental de nuestra doctrina de guerra precisando lo que de ella se desprende y contribuir a su perfeccionamiento y mantenimiento al día; b) Dirigir y conducir, dentro del marco de dicha doctrina, la preparación para el Alto Mando del Ejército; c) Estudiar las cuestiones fundamentales de la Defensa Nacional y sus relaciones con los problemas nacionales; d) Estudiar objetivamente y proponer sistemas racionales de educación e instrucción en el Ejército; e) Participar en la culturización en materia de Defensa Nacional del elemento director de las actividades del país".

Es conveniente tener en cuenta la crítica que Víctor Villanueva hace de ciertas interpretaciones ligeras que atribuyen la creación del Centro de Altos Estudios Militares a una propuesta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este error puede tener su origen en: "La propuesta que presentó el delegado del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa en 1958 (ocho años después de la creación del CAEM) para que se recomendara a los ejércitos latinoamericanos emplear "unidades especiales en obras de promoción económica. . . La propuesta peruana presentada y propuesta en 1958 en la JID y sin-

37. Víctor Villanueva, *El CAEM y la Revolución de la Fuerza Armada*, IEP, Campodónico ed., Lima, 1972, *Ejército Peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista.* Juan Mejía Baca, Lima, 1973. Julio Cotler, *Estado, clase y nación en el Perú*, IEP, Lima, 1978.

tomáticamente aprobada por unanimidad en 1960, inmediatamente después del triunfo de la revolución cubana, retrotraída cronológicamente en un decenio y convenientemente tergiversada, puede haber dado pábulo a la idea de que el CAEM se creó debido a una sugerencia de la JID".[38]

En 1954 el CAE adoptó el nombre de CAEM (Centro de Altos Estudios Militares). En 1957 pasó de la dependencia directa del Comandante General del Ejército, a la dependencia del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, institución creada ese mismo año. Debe considerarse que durante los dos primeros ciclos (1951, 1952) los participantes –salvo un coronel de la fuerza aérea peruana (FAP)– fueron coroneles del Ejército, a partir de 1953 concurrieron de modo permanente los coroneles de la FAP, en 1955, se iniciará la presencia de funcionarios civiles, en 1956 se incorporan coroneles de la Guardia Civil (GC), en 1957 se hacen presentes los capitanes de navío de la Armada Peruana y desde 1959 estarán presentes los inspectores de la Policía de Investigaciones.

Desde su inicio, y expresado por el pensamiento de su fundador, el Gral. José del Carmen Marín, el CAEM propuso "una sustantiva ampliación de sus funciones, como elemento clave de la expansión de las actividades del Estado, encargado de dirigir y organizar a la sociedad, en procura del desarrollo y, en consecuencia, de la defensa nacional".[39]

Víctor Villanueva, relievando la figura del Gral. Marcial Romero Pardo como el principal ideólogo de este instituto afirma: "Identificando el concepto de defensa nacional con el de bienestar y desarrollo económico y social y considerando esta aspiración como la finalidad fundamental del Estado, se puede deducir fácilmente que la fuerza armada, instrumento principal de la defensa nacional, ha de prepararse en primera urgencia, para satisfacer la necesidad permanente que es el bienestar, colocando en segundo término el estudio de actividades béli-

38. Víctor Villanueva, op. cit. 1972.
39. Julio Cotler, op. cit. 1978.

cas que sólo tienen aplicación en el caso eventual que es una guerra".[40]

La afirmación de Villanueva respecto de la "primera urgencia", si bien tiene el valor de resaltar la creciente preocupación de los altos mandos de la fuerza armada por el bienestar, parece excesiva, cuando pretende colocar en "segundo término el estudio de actividades bélicas". Debe recordarse que desde que se creó la Escuela Superior de Guerra se incrementó el entrenamiento de oficiales en centros académicos extranjeros para la guerra convencional y posteriormente para la contrainsurgencia. En una institución que ha incorporado a su desarrollo la práctica del entrenamiento y reciclaje permanente, la inmersión durante un año en un programa de estudios cuyo contenido está referido preferentemente a brindar una "imagen global" de los problemas del país y a exponer de manera introductoria algunos aspectos de la teoría y posible aplicación de las ciencias sociales, no puede tener consecuencias tan profundas como las que se ha pretendido encontrar. Es muy posible que el CAEM contribuyera más bien a sensibilizar a muchos oficiales frente a situaciones y problemas, que anteriormente su propia institución trató de ocultarles.

Ahora bien, la apertura y sensibilización militar hecha posible en el plano académico por el CAEM, es la contraparte de otro tipo de apertura y sensibilización promovida por el origen y pertenencia social de los oficiales a las clases medias. Esto explica, por lo menos parcialmente su estilo de vida (ingresos, aspiraciones, nivel de instrucción, etc.) y su inserción en la sociedad global, no solamente en tanto que miembros de su institución. Simultáneamente, las exigencias de su especialización técnica obliga a la oficialidad a vincularse con los problemas y colegas de su especialidad; el necesario entrenamiento que reciben en el extranjero los abre a nuevos horizontes y nuevas experiencias; el retiro muchas veces temprano y su reinserción a la "vida civil", por otro lado, no corta sus relaciones con sus antiguos compañeros. Estos y otros factores, muestran

40. Víctor Villanueva, op. cit. 1972.

la debilidad de la imagen tradicional de la Fuerza Armada como una institución aislada en el seno de la sociedad.[41]

Alcances y perspectivas de la intervención militar de 1962

En primer lugar, el estilo es enteramente nuevo: la proclama del día 18 de julio en la que se identifica al ejército con el pueblo, será firmada por el Jefe del Comando Conjunto y por los comandantes generales de las tres armas, e inmediatamente después de su difusión se promulga un decreto ley que convoca a nuevas elecciones para el 10 de junio de 1963. La represión fue prácticamente inexistente y los partidos políticos no fueron proscritos: "Víctor Raúl creerá más prudente eclipsarse por algunos días, pero nadie parece buscarlo. Los diarios seguirán circulando sin trabas y si "El Comercio" desborda de júbilo, "La Prensa" manifiesta una reserva que linda con la oposición. "La Tribuna", es cierto, es clausurada el 18 de julio, pero el 20 ya reaparece. La CTP, central sindical dominada por los apristas, lanza una orden de huelga general que en las primeras horas fracasa en Lima y sólo tiene un relativo éxito en los ingenios azucareros de la costa septentrional. El Ministro del Interior de la Junta, Gral. Bossio, asegura el orden sin encarcelar a nadie, dejando al partido aprista en libertad de fulminar, condenar, vociferar... El golpe liquida el mito del caudillo".[42]

El partido aprista afirmará su enérgica oposición constitucionalista e inmediatamente reconocerá al gobierno de facto al asumir su decisión de "mantenerse legalmente en la oposición". Ni Acción Popular, ni su candidato y fundador Fernando Belaúnde Terry protestaron por el golpe de estado, más aún, la plana mayor del comando de AP visitó Palacio de Gobierno y expresó

41. En otro ensayo, hemos criticado la interpretación que Víctor Villanueva hace del papel del CAEM en la intervención militar del 68 y aportado una larga evidencia demostrativa de la falta de un condicionamiento directo de dicha institución en la formación y orientación del grupo dirigente de la revolución peruana. Los testimonios de los participantes, contenidos en el libro de María del Pilar Tello en *Golpe o Revolución: Hablan los Militares del 68,* Lima, 1983, confirman nuestra observación.

42. François Bourricaud, op. cit. 1967.

su satisfacción por la anulación de los comicios. Por este hecho recibieron el calificativo de "lustrabotas" con que gustaron de calificarlo los militantes apristas.

Inmediatamente después del golpe, el Departamento de Estado suspendió sus relaciones con el gobierno militar y anunció que se suspendería la ayuda al Perú. Sin embargo, un mes más tarde el gobierno de los Estados Unidos reconoció a la Junta Militar, sumándose de este modo a muchos países latinoamericanos que ya lo habían hecho.

La intervención de 1962 tuvo sin duda un carácter antiaprista. La voluntad de alejarse del poder una vez realizadas las elecciones en el plazo definido con mes y día y su fiel cumplimiento así parecen demostrarlo.

El clima internacional en que se produjo el cambio de gobierno estuvo marcado por el enorme impacto de la revolución cubana y, por la respuesta de los Estados Unidos: la Alianza para el Progreso.

En los departamentos serranos se intensificaban las tensiones sociales: el movimiento campesino en los Valles de La Convención y Lares seguía expulsando hacendados y ocupando tierras; la idea de la lucha guerrillera amenazaba afirmarse (en Huamachuco y en Jauja se produjeron tomas de la ciudad, en esta última por el levantamiento del Sub-teniente de la Guardia Republicana Francisco Vallejo, quien murió en combate); en Pucyura, Hugo Blanco y un grupo de campesinos tuvieron un enfrentamiento armado con los integrantes del puesto policial, con saldo de muertos y heridos. En los medios universitarios y en pequeños grupos políticos de reciente creación la idea de la lucha armada y el ideal de la guerrilla comenzaron a cristalizar en proyectos definidos.

En enero de 1963, la Junta Militar de Gobierno realizó una detención masiva de dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles de la izquierda. Las cifras sobre "la redada" oscilan entre 1,000 y 2,000 personas. Un número no menor de 200 detenidos fue enviado a la colonia penal del Sepa, en plena selva amazó-

nica. El pretexto utilizado: un gran complot comunista. Muchos de los dirigentes detenidos fueron liberados rápidamente. Algunos fueron enjuiciados ante los tribunales militares, aparentemente, por la información que se disponía, los demás, obtuvieron su libertad progresivamente. En mayo de 1963, fue apresado Hugo Blanco y el 15 de mayo del mismo año en Puerto Maldonado, cae Javier Heraud en la primera y fracasada incursión del Ejército de Liberación Nacional.

En un cuadro social cuya nota más significativa estaba constituida por el malestar del mundo rural y la creciente presión de las organizaciones campesinas, el gobierno dicta una Ley de Bases para la Reforma Agraria, típica ley "preventiva", plagada de contradicciones y limitaciones, cuyo primer ensayo se llevó a cabo en los valles orientales del Cusco, donde se desarrollaba con mayor fuerza el movimiento campesino. La Ley trataba de consolidar la pequeña propiedad y legalizar la expulsión de los latifundistas abriendo una válvula de escape en el sector del sistema donde la presión se ejercía con mayor violencia. Si se considera el peso político de los terratenientes serranos como factor de apoyo y sostén del estado oligárquico y, si se tiene en cuenta, al mismo tiempo, el comportamiento frente al problema agrario de los gobiernos civiles y militares precedentes, el decreto tuvo una indudable importancia y contribuye a demostrar el surgimiento de un nuevo comportamiento castrense.

En el mismo sentido, otro conjunto de decisiones referidas al fortalecimiento y tecnificación del aparato estatal evidencia el alejamiento progresivo del pensamiento político de los militares —por lo menos de los oficiales superiores— con relación al pensamiento "liberal" y antiestatista, no solamente de la oligarquía, sino en general, de la derecha peruana: la Junta Militar de Gobierno en 1962 creó el Instituto Nacional de Planificación; preparó y aprobó el primer Plan Nacional de Desarrollo (1962-1971); dictó la Ley del Presupuesto Funcional y elaboró el primer presupuesto por programas; dispuso la ampliación de la planta siderúrgica de Chimbote; revitalizó la Ley Orgánica de la Empresa Petrolera Fiscal, etc.

Se ha dicho que los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. A ese principio no escapan los institutos armados, y como órgano de esos institutos, el CAEM. La evolución de la fuerza armada no puede ser comprendida fuera de la sociedad en que se desarrolla. En una sociedad en trance de mutación profunda, los conflictos y tensiones sociales, las esperanzas, frustraciones y desafíos son los factores que configuran las alternativas posibles —que muy pocas veces son las deseables— para el ejercicio del poder político.

En el caso de la Junta Militar de Gobierno, su breve paso por el poder expresa con claridad algunos de los cambios producidos en las fuerzas armadas, sobre todo en el ejército: el creciente proceso de organización y tecnificación al cual está ligado el carácter institucional de la intervención (es importante recordar el desplazamiento de Pérez Godoy y quizá también el de Bossio Collas que pueden ser interpretados como el rechazo a nuevas formas de caudillismo militar); la conciencia del necesario fortalecimiento del estado como requisito necesario para el logro de un sostenido proceso de autodesarrollo; el inicio del distanciamiento de las posiciones pro-oligárquicas y pro-imperialistas, etc. Pero, parece claro que la intervención no correspondía a un proyecto de largo aliento... Quienes lo ejecutaron —probablemente con la excepción del Gral. Bossio Collas— no expresaron posiciones consistentemente reformistas. El perentorio plazo fijado —y cumplido— para la realización de un nuevo proceso electoral es la mejor prueba de que se trató de una intervención fundamentalmente antiaprista. Como hipótesis de trabajo, puede sostenerse que el régimen de la Junta Militar de Gobierno expresaba los alcances y limitaciones de la concepción "CAEMITA" sobre la participación de la fuerza armada en la política: una concepción desarrollista, relativamente estatista, autoritaria y "preventiva".

El fracaso belaundista

Pero, no es posible comprender cabalmente la rápida legitimación del proceso revolucionario del 68, es decir, el logro de

un amplio aunque difuso consenso a su acción desde los primeros meses, si no tenemos en cuenta la frustración causada por el fracaso del gobierno de Belaúnde.

Joven diputado elegido con votos apristas en la campaña de 1945, candidato que expresaba la renovación y que logró en 1956 un significativo respaldo en las ánforas, nuevamente candidato en las frustradas elecciones de 1962, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry es elegido Presidente de la República luego de un reñido proceso electoral en 1963.

Probablemente, muy pocos mandatarios en la historia del Perú llegaron a asumir la más alta magistratura política del país con el caudal de popularidad y esperanza que alcanzó Belaúnde. Había obtenido poco más de un tercio de los votos válidos. Contaba con la simpatía de las fuerzas armadas, que un año antes habían impedido el triunfo del partido aprista con el pretexto de un muy dudoso fraude. Pero no pudo o no supo establecer una alianza que le permitiera obtener una mayoría parlamentaria.

Después de un conjunto de positivas aunque tímidas decisiones tomadas en los primeros meses de su mandato (nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, remisión del proyecto de Ley de Reforma Agraria, establecimiento de Cooperación Popular, convocatoria para las elecciones municipales, expropiación de la hacienda Algolán perteneciente a la Cerro de Pasco), y a pesar de que la alianza que apoyaba su gobierno alcanzara un claro triunfo electoral (más del 50%) en las elecciones municipales de noviembre de 1963, su gobierno fue poco a poco empantanándose en una estéril y suicida política en la que el bloqueo impuesto por los partidos que detentaban la mayoría parlamentaria —el PAP y la Unión Nacional Odriísta— ahogó las promesas reformistas que lo llevaron al poder.

La coalición Apra-Odriísta, por intereses y razones ajenas al desarrollo del país y a la consolidación de un régimen democrático, saboteó el programa de reformas del gobierno de la alianza Acción Popular-Democracia Cristiana. Ante la debilidad de un gobierno que quería desatar el nudo gordiano de la opo-

sición, los apristas, ansiosos de llegar al poder, y los odriístas, opuestos a toda reforma que mellara los ingresos de los grupos privilegiados, no aceptaron ni asumieron las reglas mínimas del juego democrático: "fair play" en la tarea de la oposición; responsabilidad compartida en las decisiones fundamentales que afectan el desarrollo y la seguridad nacional; comprensión de la elemental distinción entre las tareas propias del Poder Ejecutivo (programación y ejecución de un proyecto económico-político) y el rol fiscalizador y contralor del Poder Legislativo, distinción ésta sin cuyo reconocimiento un país no es gobernable en un régimen constitucional.

Durante cinco años la coalición APRA-UNO rechazó el mínimo esfuerzo y sacrificio grupal e institucional que hubiera posibilitado el afianzamiento de una democracia constitucional. Belaúnde, sin fuerza ni convicción para buscar otros caminos que le permitieran cumplir su ya tibio programa de reformas, se doblegó ante el "primer poder del Estado" y perdió la fuerza y la legitimidad que le otorgó el pueblo con la esperanza de que cumpliera su proyecto de renovación.

Mediatizada la tímida ley de reforma agraria; reducido drásticamente el programa de Cooperación Popular, intocados los enclaves extranjeros; manteniendo una política internacional débil, alejada del Tercer Mundo y cerrada a los países socialistas, su gobierno se torna represivo y antipopular. El naufragio se inicia en la ruptura con la DC, el cisma de su partido y la crisis económica. El hundimiento se producirá con los escándalos del contrabando y del petróleo. De este modo, en octubre de 1968, la oligarquía peruana mantenía casi la totalidad de sus posiciones y el capital imperialista había diversificado y fortalecido su presencia y control de la economía nacional.

En un cuadro general de frustración y desaliento se crearon las condiciones en un país de antigua tradición militarista para una nueva intervención castrense.

II PARTE

EL GOBIERNO DE VELASCO

El propósito de esta segunda parte es reflexionar acerca del significado político del proceso de cambios dirigido por el Gobierno del General Velasco. Para ello ordenaremos la exposición de nuestros puntos de vista en función de cinco temas: 1) el carácter procesal de los cambios y los períodos dentro de los cuales se puede entender su desarrollo; 2) las tendencias rectoras o líneas de acción principales del gobierno; 3) la naturaleza del régimen militar; 4) el pasaje del Estado oligárquico al capitalismo de Estado; y, 5) perspectivas abiertas al país.

1. *ENSAYO DE PERIODIZACION*

Resulta fundamental para el análisis de la experiencia 68-75 relievar la fluidez del proceso de cambios. Tal como ha sido expuesto en diversos trabajos [43] la revolución no puede ser comprendida como una suma de decisiones o una yuxtaposición de líneas de cambio. La envergadura de las transformaciones iniciales generó una dinámica cuya lógica interna empujaba hacia la ampliación y profundización de las reformas, es decir, a la generación de un nuevo orden social. Como se observó en esos años, los cambios iniciados conducían a la apertura de nuevos

43. Al respecto deben consultarse: Héctor Béjar, *La revolución en la trampa*, Ediciones Socialismo y Participación, Lima, 1976; Carlos Delgado, *Testimonio de lucha*, Ed. Peisa, 1973; Carlos Franco, *La revolución participatoria*, Mosca Azul, Lima, 1975.

frentes y a la modificación –léase perfeccionamiento– de las mismas reformas. Sólo así pueden comprenderse los Programas Integrales de Asentamiento Rural o las sucesivas modificaciones de la Ley de Reforma Agraria, una vez iniciada la reforma en el campo; la creación de las Comunidades de Compensación y el surgimiento de CONACI en el ámbito de las comunidades laborales; la creación del sector de propiedad social o la expropiación de los diarios, etc., etc.

En el mismo sentido, el progresivo desarrollo y enriquecimiento del proyecto ideopolítico sólo puede ser explicado por el carácter "procesal" de la revolución.[44] En la lectura atenta de los discursos de Velasco se puede hallar el hilo conductor que une el desarrollo de los cambios con la elaboración de los principales planteamientos del "modelo peruano". Pero, lo que se debe señalar, es que es la dinámica total del proceso la que explica el discurso político, aunque este tuviera una importancia decisiva en su direccionalidad.

Es conveniente por ello proponer una preliminar periodización de la revolución. Podemos distinguir en ella tres momentos diferenciales: 1) etapa de legitimación del proceso entre octubre de 1968 y fines de 1969; 2) etapa de despliegue y expansión entre los años 1970 y mediados de 1973; 3) etapa de declinación entre mediados de 1973 y agosto de 1975.

La etapa de legitimación del proceso está signada por la dación de la Ley de Reforma Agraria y la solución del conflicto con la International Petroleum Company. Ambas decisiones tuvieron una enorme repercusión social y política. Despertaron un amplio aunque difuso apoyo popular. Intimidaron a los viejos y decadentes grupos de la clase dominante. Provocaron la inmediata agresión económica de los Estados Unidos: suspensión de créditos y amenaza de la aplicación de la enmienda Hickenlooper. Bloquearon y desconcertaron a los partidos y grupos de la derecha y de la 'ultraizquierda'. Definieron el apoyo "crí-

44. Para una reflexión más amplia sobre el proyecto ideopolítico, deben consultarse los trabajos de Carlos Delgado Olivera, el teórico más importante de la revolución peruana.

tico" del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Comunista, de una fracción desprendida de Acción Popular y de la más importante central obrera del país (la CGTP). Comprometieron importantes grupos de técnicos, intelectuales y políticos que se identificaban con el "socialismo" y que estaban constituidos mayoritariamente por ex-militantes del Movimiento Social Progresista, la Democracia Cristiana y el Apra.

Entre 1970 y mediados de 1973, etapa que hemos llamado de la expansión y despliegue de la revolución, debe considerarse: la profundización de la reforma agraria; el inicio de la reforma de la empresa y de la reforma educativa; la nacionalización de grandes empresas, la limitación de la participación del capital extranjero; el desarrollo de una nueva política internacional; la creación del SINAMOS, y con él, el surgimiento de un nuevo estilo de apoyo a la participación popular; la estatización de la industria pesquera; la estatización de la industria básica; la expropiación de los diarios "Expreso" y "Extra"; la amnistía de los guerrilleros y luchadores sociales; la creación de la Confederación Nacional de Comunidades Industriales. Este es un período de relativa estabilidad política y social. Los principales conflictos populares se producen en ciertas empresas mineras y, con relación al sector público, comienza a generarse un serio enfrentamiento entre el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) y el gobierno, que afectará negativamente el desarrollo de la Reforma Educativa. En todo este período, Velasco mantiene firmemente la conducción del gobierno y, a pesar de la existencia de fuertes tensiones entre las distintas armas, éstas se resuelven internamente.

La etapa de declinamiento se inicia en 1973 con la grave enfermedad que sufre Velasco. Producida su disminución física, ella tendrá como consecuencias principales el afloramiento y agudización de los conflictos internos dentro de la Fuerza Armada, el distanciamiento entre el Presidente de la República y la élite militar radicalizada, el agravamiento del conflicto con las fuerzas policiales. La precaria salud de Velasco, auténtico líder de la revolución y férreo conductor de su institución, compro-

meterá decisivamente la marcha del proceso. Ello coincide con la aparición de los primeros efectos de la crisis económica y el incremento sustantivo de los gastos para la defensa nacional, el establecimiento de un relativo entendimiento con los Estados Unidos y la acentuación de las tendencias y comportamientos autoritarios del gobierno. Durante esta etapa, el gobierno todavía tomará importantes decisiones favorables al cambio económico, político y social: reconocimiento de la Confederación Nacional Agraria; expropiación de los diarios; nacionalización de la Marcona Mining Corporation, etc.

2. *LAS GRANDES TENDENCIAS*

Es posible descubrir las tendencias rectoras que definen el sentido profundo del proceso bajo estudio considerando cuatro grandes líneas de acción que condensan y redefinen las tareas históricas propuestas desde la década de los 20 y cuya relectura sociológica –ciertamente renovada por el transcurso de cerca de medio siglo– reencontramos en 1967. Ellas son: su orientación antioligárquica; su definido carácter antiimperialista; el fortalecimiento del aparato estatal y la compleja y contradictoria política de transferencia del poder y apoyo a la participación popular.

Liquidación de la oligarquía e inicio de un reordenamiento profundo de la estructura social

La vieja clase dominante peruana, fue una clase dependiente. Sus intereses estuvieron estrechamente ligados y muchas veces subordinados a la inversión imperialista. Por ello, el conjunto de reformas atacó simultáneamente las bases del poder oligárquico y del poder imperialista. Y las consecuencias del proceso de transferencia de propiedad, ingresos y poder favoreció a amplios sectores de las clases populares y fortaleció el aparato estatal.

Si bien es cierto que, a partir de los años 60, ciertos industriales comienzan a ser incorporados a la clase dominante, el

origen y fundamento del poder de la oligarquía jamás radicó en la industria. Tal como indica Bourricaud,[45] ellos no se entusiasmaron con los riesgos y aventuras propias de la actividad empresarial. La base de su poder se encontraba en la propiedad de las modernas haciendas de la costa que producían para la exportación, en el control de la banca y el comercio y en la propiedad y admirable uso de los medios de comunicación de masas —particularmente los diarios "La Prensa" y "El Comercio". Y, sin lugar a dudas, en su alianza con las fuerzas armadas, cuyos jefes, durante mucho tiempo estuvieron al servicio de sus intereses, logrando de este modo el respaldo necesario para mantenerse en el poder.

Una vez producido el brusco cambio de comportamiento político de las instituciones castrenses y aislados dentro del país los representantes del Departamento de Estado y los miembros del estamento gerencial extranjero, una a una las reformas estructurales fueron minando las bases del poder oligárquico, la liquidación se inició con la Reforma Agraria que borró su presencia de la agricultura costeña, continuó con la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la industria básica y culminó con la expropiación de los diarios.

La desaparición de la oligarquía —no de los ex-oligarcas— es el signo más claro de un reordenamiento profundo en la estructura social del país. Ello implicó años después el fortalecimiento y surgimiento de nuevos grupos dominantes. Principalmente de los industriales y de una tecnoburocracia robustecida por el crecimiento del aparato estatal. La recomposición de la estructura social, tuvo también entre sus fenómenos más significativos, la liquidación de la clase terrateniente serrana y el acceso a la propiedad de la tierra y a nuevas formas de organización social de un amplio sector del campesinado peruano (por lo menos 300,000 familias). Sin embargo, la reforma agraria no alcanzó a dotar de tierras a todos los campesinos del país, porque, como se sabe, en el Perú la relación hombre-

45. François Bourricaud, op. cit. 1964.

tierra es sumamente baja. La limitada redistribución de ingresos, por otra parte, no alcanzó a amplios estratos de la población campesina. La concentración de los recursos de inversión y de la provisión de servicios en Lima Metropolitana y en unos pocos centros urbanos del país acrecentó en tal sentido las disparidades regionales mientras se mantuvo en detrimento de la economía del campo la relación de precios entre la producción urbana y la producción rural. En tanto la reforma agraria no se acompañó del cambio en el patrón básico de la economía siguió generándose una tendencia estructural al incremento del subempleo en el agro.

La lucha antiimperialista

El conjunto de decisiones del gobierno orientadas a la superación de la dependencia y a la construcción de un Estado nacional cada vez más soberano y capaz de controlar y dirigir la vida económica y política del país comprendió un amplio abanico de acciones y políticas que transformaron profundamente las relaciones con los Estados Unidos. Esto se expresó en la reducción drástica de la presencia de los enclaves; la creación —por primera vez en nuestra historia— de las condiciones para el control nacional de la producción y el diseño e implementación de una política internacional autónoma.

En cumplimiento de estas políticas, el aparato estatal fue asumiendo progresivamente la comercialización externa de los productos de mayor significación económica: comercialización de la harina y aceite de pescado, de los fertilizantes, del café y el algodón; etc. En lo que se refiere al control sobre las empresas productoras de artículos de exportación —excluyendo las manufacturas— se expropió en el campo por acción de la reforma agraria la totalidad de los enclaves agrícolas. En la pesca, el aparato estatal asumió el íntegro de la industria de harina y aceite de pescado —donde también era importante la presencia de empresas extranjeras— incluyendo la explotación, transformación y comercialización. En la minería revirtieron al Estado importantes yacimientos mineros que eran mantenidos como re-

servas por empresas extranjeras. Se expropió la Cerro de Pasco C.C. y la Marcona M.C. pasando también al control del aparato estatal las refinerías existentes. En los hidrocarburos, en cumplimiento de la política petrolera, el aparato estatal se convirtió en el agente monopólico de su explotación, refinación y comercialización suprimiendo la modalidad de las concesiones petroleras. Con relación al control nacional de las empresas de servicios públicos, se expropiaron las empresas de telecomunicaciones y la que tenía a su cargo el transporte ferroviario y se hizo decisoria la participación del aparato estatal en el capital social de las principales empresas privadas concesionarias del servicio eléctrico. Respecto de los organismos crediticios se redujo la participación del capital extranjero en las pocas empresas bancarias que no cayeron bajo el control del aparato estatal.

En el importante campo de la industria manufacturera no se alcanzaron logros semejantes. El crecimiento industrial continuó desarrollándose bajo control extranjero en las líneas que mantenían un mayor dinamismo: caucho, química, automotriz, electrónica, metalmecánica, farmacéutica. Las empresas de mayor capacidad de planta y mayor volumen de producción continuaron igualmente bajo propiedad extranjera. Ello no significa sin embargo que no se iniciaran y desarrollaran importantes acciones como la Ley General de Industrias que reservó para el Estado la totalidad de la industria básica; el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros vigente en el Grupo Andino que dispuso la conversión de todas las empresas industriales extranjeras en empresas mixtas. Como señala Anaya "de las 242 empresas industriales de origen externo que han sido estudiadas... han dejado de pertenecer a este conjunto por... (compra, expropiación, retiro o quiebra) un total de 42 empresas, las cuales controlaban el 10.4% de la producción y el 15.5% de los activos fijos aproximadamente".[46] El mismo autor indica que los únicos grupos que sufrieron modificaciones profun-

46. Eduardo Anaya, *Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología en el Perú*, Ed. Horizonte, Lima, 1974, pág. 66.

das fueron: pesca industrial, fabricación de pulpa y productos de papel y fabricación de cemento aunque habría que agregar a ello los efectos progresivos que en el conjunto de la propiedad industrial originó el desarrollo de la comunidad laboral.

La nueva política internacional se expresó en la adscripción a la política de no alineamiento y en el rechazo a todas las formas de discriminación, colonialismo y neocolonialismo. La cancillería peruana consiguió conjugar la defensa de la soberanía y de los intereses económicos del país, con una política que la dotó de la flexibilidad necesaria para negociar fórmulas de entendimiento cada vez que la naturaleza de los problemas así lo requirió.

La activa participación en el movimiento tercermundista, la apertura hacia los países socialistas, el esfuerzo por el progreso del Pacto Andino, la defensa de las 200 millas, la reestructuración del sistema interamericano, fueron las líneas-fuerza de una nueva política internacional. Mediante esta política exterior se inició también una efectiva diversificación de mercados, incursionando en nuevas áreas geográficas, con especial atención al Medio Oriente y los países africanos. Y en esta búsqueda de mejores condiciones para la realización del comercio exterior, se chocó también con la presión del imperio que intentó mantenerse como principal abastecedor de armamento para la defensa nacional. Los contratos para la adquisición de armas en la Unión Soviética —sin duda—, en plazos más largos, mejores precios y menores intereses, realizados en ejercicio de nuestra plena soberanía, fueron la causa de un intenso y prolongado conflicto —que aún perdura— con el gobierno de los Estados Unidos.

La política de participación popular

El apoyo a la participación popular, entendida como un proceso de transferencia de poder y de robustecimiento de las organizaciones sociales, constituyó quizá, la dimensión más compleja y contradictoria de la revolución.

Para muchos de los que tenían una arraigada —y fundada— imagen de un militarismo reaccionario y pro-imperialista, considerar que los militares peruanos dirigieran una revolución y, además, aceptar que ésta pudiera tener algunas características genuinamente participatorias parecía excesivo, cuando no, imposible.

Ahora bien, antes de esbozar los principales razgos de la política de participación popular, es necesario señalar que ésta debe ser concebida como un aspecto del proceso en que se desarrollaba. En consecuencia, era expresión de sus carencias y valores, limitaciones y posibilidades y, evidentemente, de la dinámica de sus propias contradicciones.

En el país, extendidos sectores de la población reconocían —y reconocen— en el pasado incaico una fuente de orgullo e identidad nacional. El transcurrir del tiempo no melló, en la conciencia popular, la idealizada imagen del Tahuantinsuyo, de sus instituciones colectivas y del trabajo comunitario. A través de las comunidades indígenas, hoy comunidades campesinas, se mantuvieron ciertas formas de propiedad común, de gobierno local auténticamente democrático y, perduró también, la tradición de las faenas colectivas. No por casualidad en el pensamiento de Mariátegui y de Haya y en los programas del partido socialista y del Apra se sostuvo que "el socialismo encuentra lo mismo en la subsistencia de las comunidades que en las grandes empresas agrícolas, los elementos de una solución socialista de la cuestión agraria. . ." y, se propuso también el fomento de las cooperativas de crédito, producción y consumo y la legislación en pro de la conservación y modernización de la comunidad indígena. Por todas estas razones, en el Perú de 1968 existían condiciones que permitían el desarrollo de una política participatoria basada en el fortalecimiento y creación de empresas colectivas tales como las comunidades campesinas y las cooperativas agrarias de producción.

El Gobierno de la Fuerza Armada con la nacionalización de la IPC y el inicio de la reforma agraria conmovió la conciencia política del país, legitimó y consolidó su situación ge-

nerando un proceso de cambios que lo impulsaba a ampliar y profundizar las reformas.

Producida la expropiación de los enclaves, de los latifundios serranos, de las empresas agroindustriales de la costa, de ciertas empresas de servicios y de la industria básica, la lógica misma de los cambios planteaba la necesidad de sustituir las antiguas formas empresariales. Salvo el caso de empresas estratégicas —productivas o de servicios— se optó por crear nuevas modalidades de propiedad, gestión y distribución de los excedentes: de este modo se abrió el camino de la participación.

Debe tenerse en cuenta que el proceso revolucionario modificaba la situación de centenares de miles de trabajadores. La acción del gobierno, en la práctica, había ido más allá de lo que en sus programas prometían los partidos de la izquierda. Los grupos militares y civiles que participaban en el gobierno se encontraban frente a problemas y alternativas de solución que rebasaban el marco del debate político y económico en el que hasta entonces se había desenvuelto la acción de los gobiernos y partidos. Atravesado el umbral después del cual ya no existen las recetas convencionales, la revolución peruana optó por la participación.

Como resultante de las tensiones que expresaban las distintas orientaciones e intereses en conflicto, se crearon empresas de propiedad de sus trabajadores, empresas estatales, empresas mixtas y se estableció un proceso progresivo de cogestión en el campo de las empresas industriales, mineras y pesqueras —que debería llegar al 50%— bajo la modalidad de las comunidades laborales y las comunidades de compensación.

Ahora bien, en las sociedades en trance de mutación profunda sucede generalmente que la conciencia de lo que se rechaza es más clara que el proyecto que se quiere construir. El caso peruano no fue, en este sentido, una excepción. Pero, la definición "ni capitalista, ni comunista" no era la simple adscripción a su nuevo tercerismo: expresaba el rechazo a repetir los errores históricos de todas las variantes del stalinismo y

afirmaba la convicción de que la vía capitalista, para los países subdesarrollados, sólo había significado el bienestar para una estrecha franja de la población y la miseria y la opresión para las mayorías.

El "modelo" de la sociedad deseada era sin duda atractivo, pero era también poco elaborado y definido. Se proponía como modelo final una economía fundamentalmente autogestora; una democracia social de participación plena, con el mínimo de intermediación y el logro de una moral solidaria. Para el tránsito hacia esa sociedad se sostenía la necesidad de un Estado pluralista en lo económico y en lo político y el mantenimiento de un gobierno revolucionario que fuera transfiriendo el poder hasta que las reformas estructurales fueran "irreversibles". Evidentemente se careció de una política económica coherente y consistente para el logro de estos propósitos y el tiempo no permitió enmendar estos errores.

La política de transferencia del poder no era entendida como la entrega del gobierno a la "civilidad", ni como el solo reconocimiento a los ciudadanos de su derecho a emitir un voto cada ciertos períodos. Se trataba de construir una sociedad participatoria. Participar era decidir. La capacidad de decisión debía estar basada primordialmente en el derecho de los trabajadores a participar en la propiedad, en la gestión y beneficios de sus empresas. Estas empresas participatorias serían la base de una red institucional que progresivamente iría adquiriendo niveles superiores de integración horizontal y vertical y animando nuevas formas de gobierno local, regional, para finalmente configurar una nueva estructura de poder, una nueva organización del Estado. Ese era el proyecto a realizar.

El acceso al gobierno mediante un golpe de estado, la inicial incomprensión de todos los partidos con relación al potencial revolucionario que entrañaba el nuevo proceso y su pronta legitimación, fueron condiciones que contribuyeron a concentrar el poder en los altos mandos de la Fuerza Armada. La madurez de los consensos respecto de las reformas contribuyó a consolidar esa situación, porque la prédica y los hechos en

favor de la reforma agraria, de la nacionalización de las grandes empresas extranjeras y por la construcción de un Estado antioligárquico y antiimperialista arrastraba ya cuarenta años de duración.

Pero se trataba de un gobierno militar. Y por eso se reforzó también la orientación vertical y el traslado al ejercicio del poder político del estilo burocrático y centralista propio de las instituciones castrenses. En este marco institucional, nada propicio para el surgimiento de una organización política de la revolución, por la presencia e influencia de asesores y funcionarios civiles que participaron en el diseño de las reformas más importantes y por la receptividad de Velasco y de la élite militar revolucionaria se decidió implementar la difícil política de participación.

Ciertamente, el desarrollo de las organizaciones de base se realizó en un clima cargado de conflictos. Ellos se produjeron dentro y fuera del gobierno: el primero y más importante atravesaba el gobierno, la fuerza armada, y, en general, el país separando a quienes querían la organización popular y a los que se oponían a ella. La acusación de "comunismo" y "pro-comunismo" fue el arma más usada en esta lucha. Dentro del gobierno, el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social creado para apoyar la transferencia del poder y el desarrollo de las organizaciones participatorias) se enfrentaba a amplios sectores de la burocracia y a muchos miembros del propio gobierno que por desconfianza, temor y por defender intereses creados, frenaban y saboteaban la política de participación. Fuera del gobierno, tanto las organizaciones populares como el SINAMOS, sufrían el embate de todas las fuerzas de la derecha y de la mayoría de los partidos de la izquierda que sentían amenazados su futuro y su clientela política. Sería de gran utilidad, en este sentido, un estudio sistemático de las campañas que realizó la derecha entre 1968 y 1974, haciendo uso del control que entonces tenía de los medios de comunicación de masa, contra todas las reformas iniciadas por el gobierno. Tendría también mucha importancia el análisis riguroso de la

oposición, de casi todos los grupos y partidos marxistas —con la excepción del PCP— a esas mismas reformas que, sin embargo, ahora intentan defender.

A pesar de todo ello, entre 1969 y 1975, más de 300,000 familias campesinas fueron beneficiadas por la adjudicación de más de siete millones de hectáreas surgiendo de este modo centenares de empresas agrícolas de propiedad de sus trabajadores (886 cooperativas agrarias de producción, 57 sociedades agrícolas de interés social, 6 empresas de propiedad social, etc.). En la industria, en la minería y en la pesca se crearon 3,918 comunidades laborales (3,535 en la industria, 253 en la pesquería, 74 en el sector minero y 52 en las telecomunicaciones). Mientras que entre 1936 y 1968 se reconocieron 2,279 sindicatos en el período 1968 y 1975 se reconocieron 2,105 sindicatos. En este período se constituyó también la Confederación Nacional Agraria (CNA) que llegó a representar 20 federaciones, 144 ligas y 1,583 organizaciones de base entre: comunidades campesinas, cooperativas agrarias de producción, SAIS, cooperativas agrarias de servicios, grupos campesinos, comunidades nativas de la selva, asociaciones agrarias de conductores directos, asociaciones agrarias de campesinos sin tierra y sindicatos de campesinos; surgió igualmente la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI) y se reconoció a tres centrales de trabajadores: la CNT, la CTRP y la CGTP hoy en día la más importante central obrera del país.

Otros valiosos esfuerzos en el ámbito de la participación popular fueron: el sistema nacional de empresas de propiedad social que fue creado para superar las distorsiones que se habían producido en la experiencia de las cooperativas agrarias de producción; las distintas modalidades organizativas creadas por la Reforma Educativa en la que destacan especialmente los núcleos educativos comunales (NECs) y los consejos educativos comunales (CONSECOMs). Estos organismos, que tuvieron inicialmente importante capacidad decisoria, integraban a maestros, padres de familia, trabajadores no docentes y estudiantes adultos. En lo que se refiere a las organizaciones representativas

de los pueblos jóvenes (barrios marginales), el trabajo no fue profundo, pues en ese campo no se produjo ninguna reforma estructural aunque debe registrarse el surgimiento de centenares de comités y organizaciones vecinales. Finalmente, el frustrado proyecto de socialización de la prensa, mediante el cual se proponía transferir los diarios expropiados a organizaciones representativas de distintos sectores sociales del país (campesinos, obreros, profesionales, organizaciones de servicios, etc.) constituyó otro signo de la intención de cambiar el antiguo sistema de propiedad y uso de los medios de comunicación.

Si se recuerda las características reivindicatorias del movimiento popular se constatará el salto cualitativo producido por la revolución. Antes de 1968, con la excepción del movimiento campesino de la sierra, el movimiento popular no demandó la propiedad, ni la copropiedad de los medios de producción. Tampoco se planteó la participación en otros ámbitos de la red institucional del país. El movimiento obrero se limitó a negociar mayores salarios y mejores condiciones de vida. La autogestión y la posibilidad de construir una sociedad participatoria no estaban presentes en el horizonte de la vida nacional.

El fortalecimiento del aparato estatal

En el Perú antes del inicio de la revolución, se reconocía la carencia de un grupo empresarial dinámico y no existía el marco institucional que permitiera el direccionamiento de la economía.[47] El proceso de industrialización refleja la estrategia de las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales se situaron generalmente en sectores económicos estacionarios. El mercado de trabajo, por su tendencia restrictiva, no podía absorber el explosivo incremento de la población (3% anual) y los beneficios del sistema tendían a concentrarse en las grandes empresas y los grupos de mayores ingresos. En una sociedad así organizada, el fortalecimiento del aparato estatal

47. François Bourricaud, "Estructuras sociales y regímenes políticos en América Latina", en *Revue de l'action populaire*, Paris, junio de 1963, p. 704.

era una condición necesaria —aunque insuficiente— para el inicio de un proceso de desarrollo autocentrado y la reestructuración de la producción poniéndola al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías.

Para esos propósitos, el gobierno trazó una estrategia orientada a transformar la estructuración de la propiedad, los ingresos y la participación, reducir la dependencia externa e incrementar los niveles de ocupación. En esta estrategia, la función del aparato estatal como planificador, productor, comercializador y promotor tenía una primordial importancia.

Entre 1968 y 1975 el desarrollo del aparato estatal se llevó a cabo mediante un amplio abanico de acciones: desarrollo de una política petrolera que convirtió al Estado en el agente principal de la explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos; estatización de la industria de harina y aceite de pescado que incluía las fases de explotación, transformación y comercialización; nacionalización de importantes organizaciones bancarias (Bancos: Popular, Continental, Internacional y Progreso), creación de la Banca Estatal Asociada, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y vigorización del Banco de la Nación. Igualmente, el sector público se convirtió en el principal agente de la actividad minera del país, mediante el control de comercio exterior, la expropiación de la Cerro de Pasco —la más grande e importante empresa minera del país— y de la Marcona, la reversión de numerosos yacimientos mineros y el inicio de la construcción de refinerías de cobre y zinc. Asimismo, se reservó la industria básica y este objetivo comenzó a cumplirse con la expropiación de la industria del cemento y parte de las industrias química y papelera. Se estatizaron las telecomunicaciones, los servicios eléctricos y el transporte ferroviario. Adicionalmente a los minerales y el petróleo, el sector público adquirió el control del comercio del algodón, lana, azúcar y los principales insumos para la industria y agricultura.

La política tendiente a fortalecer el aparato estatal a fin de que el gobierno pudiera conducir efectivamente la vida eco-

nómica del país y el comportamiento conservador del sector privado, convirtieron al sector público en el agente más dinámico de la economía y en el principal responsable del crecimiento y del desarrollo: si hasta 1968 el sector no público realizaba aproximadamente el 70% de la inversión bruta fija total, para el bienio 1975-1976 el 50% de la inversión correspondería al programa del sector público.

La historia económica de América Latina había demostrado que los grandes proyectos económicos necesarios para promover un desarrollo autocentrado jamás fueron realizados por las "burguesías nacionales" (siderurgia, petroquímica, grandes irrigaciones, grandes centrales hidroeléctricas, etc.). Por su magnitud y no rentabilidad inmediata, ellos fueron siempre asumidos por el Estado o la inversión extranjera. Estos proyectos, sustantivos para el desarrollo a largo plazo, fueron iniciados por el gobierno, buscando ubicar las unidades productivas, servicios sociales e infraestructura, en determinadas zonas del territorio definidas como bases para el desarrollo regional. Deben mencionarse como los principales: la continuación de la irrigación Chira Piura, la construcción del complejo pesquero de Paita, el proyecto de fosfatos, la planta de fertilizantes y las plantas de negro de humo y solventes en los departamentos de Piura y Tumbes. En el Oriente se realizó el proyecto que comprende las actividades de exploración, explotación y construcción del Oleoducto Nor-Peruano que han permitido que el país recupere su calidad de exportador de petróleo. En Chiclayo se continuó la última fase de la primera etapa de la irrigación de Tinajones. En Chimbote se amplió considerablemente la producción siderúrgica, proyecto básico para el desarrollo industrial. En el área central deben tenerse en cuenta la construcción de la refinería de zinc en Cajamarquilla, la ampliación de la refinería de La Pampilla y la integración del complejo Centromín en su área de influencia. En la zona sur, se iniciaron los trabajos para la irrigación de Majes, se inició el proyecto Cerro Verde y el plan Copesco para el desarrollo turístico e industrial. A todo esto, debe añadirse la inversión del sector privado en la minería donde destacan Cuajone y la expansión de Toquepala.

Hasta 1968 existían en el Perú seis bancos estatales y doce empresas públicas, cuyo movimiento económico era muy reducido. Hacia 1975, bajo diversas modalidades, el sector estatal participa en 174 empresas, de las cuales cerca de las dos terceras partes estaba bajo su control total.

3. *EL REGIMEN POLITICO*

Como ha sido indicado al inicio del presente ensayo, su propósito se orienta a revelar el significado histórico de la revolución peruana. Para comprender su naturaleza no basta señalar sus tendencias más relevantes. Por ello, es necesario ahora detenernos en las características formales de éste, vale decir, en su estructura militar, burocrática y autoritaria.

Causas y condiciones de la intervención militar

La intervención de las fuerzas armadas en la vida política de muchas sociedades muy diferentes entre sí, constituye un fenómeno perdurable y de extensión muy amplia. Respecto del tercer mundo, y específicamente de América Latina, se ha llegado a afirmar —en nuestra opinión con exceso— la existencia de un determinismo militar capaz de anular "uno o todos los procesos de la historia".[48]

En el caso peruano, la historia de la República ha sido en una apreciable proporción, una historia de gobiernos militares. En consecuencia, al margen de simpatías o prejuicios, tenemos que reconocer que las intervenciones castrenses están muy lejos de constituir una expresión de "anormalidad" o de "patología" política.

En el análisis de las intervenciones militares, es conveniente distinguir los factores estructurales de los factores circunstanciales que favorecen su irrupción mediante la intervención directa. Los factores estructurales son aquellos que generan

48. Irving Horowitz, "Los militares de América Latina", en *Elites y Desarrollo en América Latina,* Lipset y Solari, Buenos Aires 1969.

una tendencia crónica a la intervención, y, como afirma José Nun, es muy importante descubrirlos para de este modo superar una interpretación de la historia como "suma de acontecimientos" y reconocer las regularidades que permiten su mejor comprensión. Los factores circunstanciales son contingentes y suponen generalmente la existencia de los primeros.

En la sociedad peruana actual —pensamos en los últimos veinticinco años— por la acción de factores internos y externos la fuerza armada se ha desarrollado como una institución con un alto grado de cohesión y profesionalización. Por la extracción social de la mayoría de sus miembros, puede ser considerada como una institución de clase media. Pero es una institución moderna, tanto por el nivel de instrucción que alcanzan los oficiales, como por sus técnicas de organización e información. La eficiencia organizacional que posee, los recursos económicos de que dispone, la total jerarquización de sus mandos y el poder de las armas, en una situación donde la gran mayoría de las organizaciones sociales y políticas se caracterizan por su debilidad y fraccionamiento, la convierten —por la debilidad relativa de las otras fuerzas— en la organización más poderosa del sistema político. Por tanto, goza de un importante grado de autonomía relativa con relación a las clases dominantes, a las instituciones sociales y los partidos políticos.

Se admite, generalmente, que el fortalecimiento de una clase social o de una fuerza política implica el debilitamiento correlativo de las otras clases o fuerzas competidoras. En cierta medida, el fortalecimiento de la clase media con todas sus ambigüedades e indefiniciones explica el mayor desarrollo de la fuerza armada, y viceversa, porque el fenómeno es dialéctico, y ello explica, aunque también parcialmente, el correlativo deterioro de las bases del poder oligárquico. En el mismo sentido, debe considerarse el progresivo, aunque lento, fortalecimiento de la clase obrera y del campesinado. Este fortalecimiento debe ser comprendido principalmente por el logro de una mayor y mejor organización y no solamente como el fruto de un crecimiento cuantitativo.

Ahora bien, desde esta perspectiva, la profunda heterogeneidad de la estructura social, la persistencia de hondas diferencias económicas y culturales, la carencia de valores e intereses comunes suficientemente generalizados y la oposición de intereses económicos y políticos inmediatistas que impiden la cristalización de alianzas y frentes de las organizaciones populares, otorgan un enorme peso y una gran capacidad de intervención a los institutos armados.

Los partidos de orientación conservadora y los grupos de poder económico que se reclamaban de una posición liberal en el plano ideológico y democrático en la práctica política, no han vacilado en convocar y provocar la intervención militar cuando el desenlace de situaciones conflictivas no ha favorecido sus intereses inmediatos. Estos grupos que, al menos en su retórica pública, concebían a los gobiernos militares como fenómenos regresivos y expresiones de patología política, en 1948 socavaron el gobierno constitucional de Bustamante y Rivero, provocaron la intervención castrense y luego apoyaron la dictadura odriísta (1948-1956). En 1962 frente a la inminencia del triunfo aprista, denunciaron las elecciones y presionaron abiertamente a la fuerza armada para que asumiera el poder. Finalmente entre 1963 y 1968, el conservadorizado partido aprista conjuntamente con el partido odriísta bloquearon el programa de reformas del gobierno de la alianza entre AP y la DC, generando las condiciones y el consenso necesario para la intervención militar.

Haciendo un razonamiento analógico al que Imaz y Nun hacen para la Argentina, también se puede decir para el caso peruano, que la presión continua de los civiles en favor de la intervención militar, que no siempre es visible en el análisis superficial de los acontecimientos, ha sido un recurso permanentemente empleado por la gran mayoría de los grupos económicos y políticos, y se convirtió en una de las reglas tácitas del juego político. Regla que nadie invocaba expresamente, pero de la cual muchas veces obtuvieron ventajas. Regla que todos recusaban en público, pero cuya existencia no podían desconocer los hombres políticos en su fuero interno.

Un régimen militar

Desde un punto de vista formal, es decir, haciendo abstracción de la orientación de sus decisiones y políticas concretas al servicio de determinados grupos y clases sociales, los regímenes militares presentan características comunes. El proceso peruano no escapa a esta regla y quizá haya constituido el más militar de los regímenes militares de América Latina. Se trata de una intervención directa. Las Fuerzas Armadas asumen el Gobierno en su propio nombre. Desde el primer momento, la Constitución del Estado es subordinada al Estatuto de la Revolución. Se clausura el Parlamento. Comienza a estructurarse un sistema de gobierno con un alto grado de centralización del poder. Las funciones ejecutivas y legislativas se unifican bajo un solo comando. En la práctica, el Presidente de la República asume plenamente la conducción del gobierno, aunque la jerarquía formal de las nuevas instituciones lo subordine a la Junta Revolucionaria (órgano integrado por los comandantes generales de las tres armas) y al Consejo de Ministros. Casi inmediatamente, surge el COAP (Comité de Asesoramiento de la Presidencia) que agrupa a los Coroneles que intervinieron en el golpe, organismo que informalmente en los primeros meses y luego institucionalmente jugaría un rol importante en la definición de la estrategia, en el cumplimiento de funciones legislativas y en la preparación de las decisiones más importantes del gobierno.

Un régimen burocrático

Varios estudios han destacado que el ejército peruano se ajusta estrechamente a ciertas pautas racionales y burocráticas en su estructura educativa, promocional y sobre todo en su estructura jerárquica. Dichas normas y la racionalidad a la que corresponden incidieron fuertemente en su actuación como institución política. En las fuerzas armadas peruanas, como en toda institución castrense, la autoridad está dispuesta en forma de una pirámide. En ella, cada grado debe obediencia explícita a las órdenes de sus superiores, el mando es centralizado,

los cargos son otorgados en función del rango y, en general, la práctica de la subordinación establece una "distancia social" entre los niveles superiores e inferiores. El ejercicio monopólico de los cargos más importantes –ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales– trasladó al gobierno el estilo y la lógica de la organización y comportamiento de la burocracia militar. La gran concentración de poder en manos de oficiales de alta graduación de las tres armas explica por qué la mayoría de los más importantes conflictos, tuvieron casi siempre una expresión castrense. Además, el hecho de que las fuerzas armadas fueron el apoyo principal y decisivo del gobierno explica por qué la unidad institucional constituyó siempre un valor de primerísima importancia, pues de ella dependía la supervivencia del régimen.

Un régimen autoritario

La caracterización del régimen como autoritario se justifica porque la acción de los titulares de los roles del poder no estuvo limitado por la intervención de otras instancias específicamente políticas exteriores a ellos (elecciones, parlamento, plazo para el mandato). Si bien el régimen respetó la autonomía relativa de ciertas esferas del poder –poder económico y poder ideológico–, no existieron mecanismos efectivos de control del gobierno por la colectividad. El ejercicio del poder fue incondicional y "permanente". No existieron garantías para el cuestionamiento de los actos de gobierno. La transferencia del gobierno se realizó de acuerdo a normas orientadas a organizar un mecanismo de sucesión de la minoría de mediación –los oficiales de más alta graduación de la fuerza armada– que monopolizaba la pretensión de ocupar los roles del poder.

Los regímenes autoritarios combinan la tolerancia del pluralismo social y cultural con el monopolio de la acción del gobierno. Los regímenes autoritarios son contradictorios, están permanentemente tironeados entre las tendencias que pugnan por liberalizarlo y las que aspiran a un mayor control. Son sistemas de poder híbridos que toman sentido verdadero como re-

gímenes de transición. No llegan a constituir formas estables de organización del poder... "la solución depende de la historia y de los hombres que la protagonicen".[49]

El proceso revolucionario fue posible gracias a la existencia de un alto grado de concentración del poder. El régimen establecido no aceptó mecanismos de control, no negoció con sus enemigos y, más bien, cuestionó su existencia misma. El carácter autoritario del régimen fue condición necesaria de la revolución, porque mediante políticas de negociación y compromiso no se pueden realizar en períodos históricos relativamente cortos, alteraciones profundas que afecten decisivamente los intereses y existencia de las clases dominantes.

Pero la naturaleza autoritaria del régimen, condición de eficacia de la revolución, entrañaba al mismo tiempo sus más serios límites.

El hermetismo y el secreto de las decisiones en que participaban un muy reducido número de personas, impidió un amplio debate sobre temas y problemas de primera importancia para la vida del país, pero, y sobre todo, imposibilitó la participación directa de las organizaciones populares en la gestación de las decisiones que cumplían viejos anhelos limitando drásticamente la generación de un clima revolucionario.

La rigidez burocrática con la que se estableció y mantuvo la asignación proporcional de ministerios y empresas públicas, a los institutos armados, el sistema de compartimentos estancos en que éstos funcionaron y los celos y rivalidades institucionales fueron causa de ineficiencia, descoordinación y, en no pocos casos, de incompetencia en quienes tuvieron a su cargo las más altas responsabilidades del sector; pensemos por ejemplo, en los ministerios de Salud y Vivienda, donde no solamente no se avanzó durante esos años, sino que se retrocedió.

La verticalidad de la estructura jerárquica de la fuerza armada dificultó y muchas veces impidió la crítica interna. En

49. Natalio Botana, *La legitimité probleme politique,* Buenos Aires 1968.

muchos sectores civiles del gobierno este fenómeno adoptó la fórmula de la autocensura. Pocos hombres y pocas instituciones son excepciones a esta regla. Por su capacidad crítica debe distinguirse al SINAMOS de los primeros años, el Instituto Nacional de Planificación, los funcionarios que diseñaron y aplicaron las reformas en los ministerios de Agricultura, Educación, Comercio y Economía, y el conjunto de políticos e intelectuales que asumieron la conducción de los diarios entre julio de 1974 y marzo de 1976.

El traslado de una lógica de comportamiento basada en la disciplina y la jerarquía y donde "las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones" al ejercicio del poder político, conllevó un sinnúmero de contradicciones, generando en extendidas capas de la oficialidad una fuerte disonancia que impedía armonizar el presunto carácter "apolítico de la institución" con la responsabilidad concreta del gobierno y sus esenciales características de tarea incierta y contenciosa. De esta incomprensión de la política, como una dimensión inescapable de la vida humana y de su confusión entre lo político, vinculado al interés nacional y lo partidario, propio de los intereses grupales y particulares, se derivaron una serie de consecuencias funestas para el proceso revolucionario: la frecuente incomprensión de las huelgas; el rechazo de la crítica, sobre todo de aquélla que provenía de grupos cuya ideología y lectura de la realidad eran contradictorias a su propia imagen; el desconocimiento de la esencia conflictual de todo proceso de cambio político y social, etc.

Y de su carácter militar-autoritario, se derivaron también dos de las más importantes tendencias, cuyo carácter defectivo no pudo ser superado y que, de no haber mediado la enfermedad de Velasco (1973) y su retiro del poder (1975), hubieran puesto a prueba su extraordinaria claridad y firmeza como conductor de la revolución: la renuencia a formar una gran organización política "heredera" del proceso y la existencia de un mecanismo de recambio en el poder dentro del ejército y de acuerdo a sus propias reglas. Ambos problemas estaban ligados

a las tendencias al ejercicio excluyente del poder presentes en considerables sectores de la alta oficialidad. Siendo Velasco un hombre que se sentía tan ligado a la fuerza armada ¿hubiera sido capaz de dar el salto cualitativo de la "revolución desde arriba" a la "revolución popular"? ¿hubiera apoyado y defendido la organización de una fuerza política que hubiera sustituido a la fuerza armada como espinazo de la revolución? En otros términos, la revolución peruana ¿se truncó o se agotó? Las respuestas a estas preguntas, jamás podrán ser respondidas de una manera científica. Pero lo que sí es posible afirmar es que Velasco fue un extraordinario dirigente político y jefe militar. En un proceso de las características del peruano, su presencia como conductor de la revolución tuvo una importancia crucial en la estabilidad del régimen, en la firmeza y claridad de su orientación, en el arbitraje y solución de una complicadísima red de conflictos económicos, políticos, sociales, internacionales. La fuerza armada fue atravesada por un conjunto de conflictos entre el conductor, la élite radicalizada y su institución; entre los distintos institutos castrenses y entre éstos y la policía; entre los militares que desempeñaban cargos gubernamentales, "los políticos" y los que se mantenían en los mandos de tropa, etc. Por ello, su salida y recambio por el general Morales Bermúdez, no sólo significó el fin de la revolución sino el inicio de su desmantelamiento.

4. *DEL ESTADO OLIGARQUICO AL CAPITALISMO DE ESTADO*

En un libro publicado en 1964.[50] Helio Jaguaribe proponía a las naciones subdesarrolladas tres modelos globales para hacer frente a la crisis social y programar eficazmente su desarrollo. Esas tres "hipótesis o modelos" eran: el bismarckismo, el capitalismo de Estado y el socialismo.

El capitalismo de Estado es el modelo político que consiste en superar la crisis social mediante la transferencia al Estado

50. Helio Jaguaribe, *Desarrollo económico y desarrollo político,* EUDEBA 1964.

de la iniciativa y el control de las empresas de los particulares y por la acentuada nivelación de la capacidad de consumo de todos los estratos e individuos. Se distingue del socialismo por el hecho de no abolir la propiedad privada de los medios de producción y de no suprimir la economía de mercado. Se distingue del neobismarckismo porque el Estado no se limita a la programación del desarrollo y a la regulación arbitral de los regímenes de participación sino que, además, se convierte, por vía tributaria en la fuente principal de ahorro e inversión y asume, por intermedio de la burocracia tecnocrática, la gestión de las principales empresas.

La implementación del capitalismo de Estado tiende a producirse en las sociedades en que no existe un empresariado burgués importante y donde la dirección del desarrollo es ejercida por la tecnocracia burocrática y militar de la clase media.

Está dentro de la lógica interna de este proceso, que el nuevo régimen, para mantenerse en el poder y lograr sus objetivos, tenga que abrirse a las masas proletarias y campesinas, adquiriendo el sentido de una revolución social dirigiéndose hacia el desarrollo económico y social mediante una mayor nivelación de los regímenes de participación.

Conquistado el poder, el régimen comienza a experimentar la necesidad de un instrumento de mediación entre el gobierno y la comunidad. Surge entonces, el "partido oficial" que tiende a ser el único partido admitido por el país. En el capitalismo de Estado los programas de gobierno son formulados por el gobierno mismo. El papel del partido será encuadrar a las masas en la línea de la revolución, asegurándole a ésta un contingente de militantes que constituyen, en parte, los profesionales que formarán los nuevos cuadros de la administración y de las fuerzas armadas.

El capitalismo de Estado no parecería ser una forma estable de organización del poder. Implantado por la tecnocracia de la clase media, en ausencia de un eficiente empresariado burgués, tanto el éxito como el fracaso de este régimen tien-

den igualmente a provocar su superación: si persiste la propiedad privada de los medios de producción y la economía de mercado, el régimen puede llevar a la gradual formación y expansión de una burguesía nacional que pretenderá, a partir de cierto período, intervenir más decisivamente en los asuntos públicos, conduciendo al país a un régimen nacional-capitalista. Por el contrario, para proteger su economía del control del capitalismo extranjero, o para emprender un esfuerzo de desarrollo más radical y profundo, el régimen puede ser llevado a suprimir la propiedad privada de los medios de producción y adoptar un sistema socialista de producción.

El capitalismo de Estado, constituye pues un estado de transición, un proceso abierto que puede desembocar en alternativas que dependen de las circunstancias histórico-concretas y de los hombres que las enfrentan.

Pero Jaguaribe fue aún más lejos. En un artículo de un alto valor predictivo –por lo menos para el caso peruano– publicado en 1967 [51], combina los tres modelos anteriormente mencionados con tres situaciones típicas.

La primera es aquélla en que los grupos importantes de las clases elevadas sienten un interés efectivo por la promoción del desarrollo económico y social de su nación. Esos grupos están dispuestos a emprender dicha realización, a aceptar sus responsabilidades, pagando el precio necesario siempre que sus esfuerzos sean debidamente compensados. Estos sectores forman lo que puede llamarse una burguesía nacional y puede ser el caso de México, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile.

La segunda situación es aquélla en que prevalece un sistema o una coalición de dos clases, oponiendo los sectores privilegiados a las masas subprivilegiadas, compuestas en su mayoría de campesinos. Allí no se ha formado una clase media claramente definida y puede ser el caso del Paraguay y la mayoría de los países de América Central.

51. Helio Jaguaribe, "Los modelos políticos y el desarrollo nacional de América Latina", en *Aportes* Nº 6, págs. 88-106.

La tercera situación típica es aquélla en que los sectores y los grupos realmente interesados en fomentar el desarrollo económico-social no pertenecen a las clases superiores, que siguen siendo tradicionales, sino a una clase menos privilegiada. Estos sectores y estos grupos constituyen una clase media nacional, cuyos valores y comportamientos son distintos de los de la clase privilegiada. Generalmente se trata de los grupos formados por los técnicos, los directores de empresas y los intelectuales que, en el ejército, en la administración y en algunas entidades privadas intervienen en las actividades más adelantadas del país. En América Latina, este es el caso de Bolivia, Ecuador y Perú.

Esta tercera situación "puede orientarse hacia el desarrollo nacional mediante el modelo del capitalismo de Estado".[52] En el Perú la forma y la intención oficiales del régimen son más propias del capitalismo nacional: "Pero la realidad peruana le empuja hacia el primero —el capitalismo de Estado—. El hecho de que el ejército siga siendo el árbitro de la política y un instrumento mejor organizado y más eficaz para un cambio social que el partido de Belaúnde, contribuye de manera decisiva a consolidar las características capitalistas de Estado en la evolución política. Mas, este mismo hecho debilita la estabilidad del régimen, ya que ni Belaúnde ni, por el momento, el ejército parecen aceptar esta situación".[53]

Quizá sea innecesario añadir que para Jaguaribe, los modelos económicos y políticos son construcciones intelectuales que no pueden garantizar el éxito. Son fórmulas para la acción y el éxito o fracaso dependen de cada situación concreta, del acierto en su aplicación, de la habilidad con que se enfrenten los problemas y situaciones peculiares, etc.

La revolución peruana canceló la larga noche del Estado oligárquico. Respondió en gran medida a los planteamientos, previsiones y reivindicaciones de Haya, Mariátegui y de los parti-

52. Ibid, pág. 93.
53. Ibid, pág. 96.

dos socialistas y apristas. Pero entrampada en sus propias contradicciones y carente de la firme conducción de Velasco su desarrollo se detuvo cuando en el país se configuraba el capitalismo de Estado: situación transitoria, régimen híbrido, cuya característica principal radicaba en la tensión irresuelta de fuerzas que tendían, por una parte, a una mayor concentración del poder que posibilitara el salto hacia una forma de organización socialista de la sociedad peruana y, por la otra, hacia la paralización de las reformas, la liberalización del régimen, el regreso a "la civilidad" y la reinstauración de una democracia constitucional cuya expresión económica y social sería la de un neo-capitalismo burgués y dependiente. Sin duda, habían otras tendencias, pero estas dos eran las principales.

5. *PERSPECTIVAS*

En un hermoso libro publicado a fines de la década de los años sesenta, Roger Garaudy [54] sostiene que por primera vez en la historia, las exigencias del desarrollo económico y técnico y las exigencias de la democracia y del desarrollo humano caminan en la misma dirección, dado que el desarrollo pleno de lo que es específicamente humano en el hombre, su aptitud creadora, se convierte cada vez más en la condición primordial del desarrollo económico y técnico.

Garaudy se plantea asimismo que para hacer frente a esta enorme posibilidad conviene eliminar cierto número de ilusiones y de mitos: en primer término, los mitos y las ilusiones de la espontaneidad y del automatismo:

> "En el mundo capitalista, el mito según el cual el solo desarrollo de las fuerzas productivas permitiría resolver los problemas planteados por la nueva revolución científica y técnica sin un cambio radical de las relaciones de producción, de las relaciones de clase, es

54. Róger Garaudy, *El gran viraje del socialismo*, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas 1971.

> decir, sin la desaparición del capitalismo y de su mismo principio.
>
> En los países socialistas, la ilusión simétricamente inversa según la cual el solo cambio de las relaciones de producción resolvería de una vez por todas y engendraría automáticamente al hombre nuevo, como si la destrucción de las contradicciones fundamentales del capitalismo a un nivel económico bastase para abolir las contradicciones a nivel de las superestructuras y para resolver sin tropiezo los problemas planteados por los cambios cualitativos en el desarrollo de las fuerzas productivas".

Como es fácil observar, éstas son reflexiones que se desarrollan en realidades que avizoran ya el fin de la penuria. En cambio, en sociedades como la peruana, caracterizadas por la desigualdad y la escasez, los mitos y las ilusiones de la espontaneidad y automatismo, se presentan quizá con mayor fuerza. Ellos deben ser igualmente desechados. Pero, ¿podemos plantear la construcción del socialismo en los mismos términos? La tarea socialista de conformar una sociedad que ofrezca a sus miembros la posibilidad efectiva de llegar a ser creadores en todas las dimensiones de su existencia social ¿es realizable para nosotros por caminos en que el desarrollo económico y técnico vaya de la mano con las exigencias de la democracia y del desarrollo humano pleno? Esta es una pregunta crucial y las respuestas a ella requieren un debate amplio y abierto.

Parecería que para un importante sector de la izquierda, el más activo y militante, comprometido con las organizaciones obreras y campesinas, aunque pocas veces realista y dispuesto a asumir responsabilidades de gobierno, la democracia es buena... sólo mientras se está en la oposición. A pesar de tener conciencia de su situación minoritaria, ellos no proponen con seriedad fórmulas de transición. Sus estrategias, si se las puede llamar así, no consideran mediaciones históricas hacia la sociedad deseable. Priman los planteamientos del "todo o nada" y la

disposición a "quemar naves" en aras de una pretendida pureza ideológica, que confunde la praxis revolucionaria con una acción mimética y repetitiva, fruto de una antihistórica lectura del pensamiento de Marx y de Lenin.

Otro sector, más pragmático, menos ideologizado, mejor dispuesto a desarrollar su acción partiendo de los recursos y posibilidades que ofrece la coyuntura, pero con una fuerte inclinación a soslayar los conflictos sociales y a desasirse de las exigencias de las clases populares, parecería considerar que la nueva sociedad debe ser construida mediante procesos democráticos. Estos grupos bordean el oportunismo. No están vinculados a las organizaciones de trabajadores y carecen de un proyecto político que trascienda la realidad. Se trata muchas veces de técnicos con una alta calificación o de profesionales liberales. Estos grupos no tienen una firme convicción socialista, pero su concurrencia es necesaria para cualquier gestión gubernamental que aspire a la eficiencia.

Ciertamente, hay posiciones intermedias que combinan el dogmatismo con el pragmatismo y existen otras variantes. Por el momento, interesa solamente dejar establecido que frente a una de las grandes líneas de la tarea socialista, las izquierdas en el Perú presentan profundas contradicciones.

No queremos sugerir que estas contradicciones son únicamente el fruto de la adopción de distintas posturas ideológicas. En nuestra opinión, este amplio abanico de posiciones encuentra como una de sus causas fundamentales la extrema y no suficientemente reconocida heterogeneidad de la estructura social. Recordemos que son peruanos los miembros de las comunidades nativas de la selva, los campesinos quechuas y aymaras de las zonas más deprimidas de la sierra, los obreros y campesinos incorporados a la economía de mercado, el matizado espectro de las clases medias, los trabajadores del llamado sector informal urbano, etc.

Los partidos, grupos y movimientos políticos de la izquierda se han mostrado incapaces, hasta el momento, de crear or-

ganizaciones que articulen y expresen los intereses y aspiraciones de una parte importante del conjunto de las clases medias y populares. En la práctica han privilegiado siempre un determinado sector social o un estilo de lucha: las invasiones de tierras de los años 60, las guerrillas del 65 o la preferencia de ciertos grupos a trabajar en el medio obrero, campesino o universitario. Puede afirmarse que en la actualidad, ningún partido o grupo de izquierda cuenta simultáneamente con una sólida base obrera, campesina, estudiantil y de clases medias.

De esta virtual sectorización del trabajo político se desprende la inexistencia de un programa de la izquierda que trascienda los intereses de reducidos sectores de la población.

En este sentido cabe preguntarse: ¿ese estilo "sectorizado" de acción política puede ser superado por la izquierda peruana?, ¿pueden los partidos y movimientos de esta orientación contribuir al logro de un proyecto nacional de desarrollo orientado a obtener un amplio respaldo popular?, ¿este proyecto puede ser una respuesta eficiente a las exigencias del desarrollo económico?

El proyecto nacional requiere políticas para enfrentar exitosamente situaciones muy complejas que presentan problemas diferentes en relación con el poder y la tecnología;[55] la producción, el comercio, finanzas, estilos de vida y trabajo, defensa y represión, sistemas de gobierno y administración, etc.

En la formulación de estas políticas y en su articulación debe tenerse en cuenta su viabilidad: disposición de recursos naturales, humanos, tecnológicos y de capital (viabilidad física); consideración de las actitudes y tradiciones de los grupos sociales y su grado de organización institucional (viabilidad social): cálculos de las fuerzas que se oponen y apoyan el proyecto nacional (viabilidad política).

55. Oscar Varsavsky, *Marco histórico constructivo para estilos sociales, proyectos nacionales y sus estrategias*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1975.

Las experiencias de otros procesos de cambio son invalorables, pero su aplicabilidad es siempre restringida. En consecuencia, ¿cuánto hemos avanzado en la proposición y aplicación de esas políticas?

Entre 1968 y 1975 se dieron pasos muy importantes en la transferencia de los medios de producción a los trabajadores, en la promoción de nuevas formas de participación en las empresas, en el fortalecimiento del aparato estatal que permitiría al gobierno conducir la economía nacional etc. Ahora bien, si el horizonte que nos guía es el de una sociedad socialista, el camino recorrido fue muy corto.

En la actualidad, en franco proceso de regresión, ¿cuánto ha avanzado la izquierda en su diseño de un proyecto nacional si consideramos como punto de partida 1975?

En el debate teórico, en la proposición de planteamientos y políticas para el proyecto nacional, el avance es muy pobre. Todavía nos movemos preferentemente en el plano de la consigna, la crítica tendenciosa y las vagas generalizaciones. No se podría afirmar que la izquierda dispone de los elementos centrales para un programa socialista. En este terreno, más que contradicciones, encontramos ausencias y omisiones.

Son aún muy pocos los estudios que aprovechan la rica experiencia de los últimos años: nuevas formas de participación de los trabajadores (cooperativas agrarias de producción, sociedades agrícolas de interés social, comunidades laborales, empresas de propiedad social); nuevas posibilidades de acción del Estado (control del comercio exterior, control de la generación de divisas y de su uso, control de la industria básica, control de los servicios esenciales, etc.); reestructuración de la política internacional, etc.

No existe una conciencia generalizada de que los avances logrados en esos años —socavados por la acción de los dos últimos gobiernos y por una eficiente campaña que la derecha realiza dentro y fuera del país— constituyen el necesario punto de partida para la superación del capitalismo. Más aún, existen

grupos de izquierda que cegados por intereses inmediatistas y bloqueados por rigideces ideológicas confluyen en las confusionistas campañas de la derecha. Estas, asocian las transformaciones estructurales con las consecuencias de la crisis económica y pretenden que el gobierno de Morales Bermúdez fue la necesaria consecuencia del gobierno de Velasco.

Retomemos ahora la reflexión sobre las nuevas exigencias de la tarea socialista. En relación con ellas hemos planteado el problema de la viabilidad, en sociedades de penuria, de un proceso de construcción del socialismo que concilie las exigencias de la democracia con las necesidades del desarrollo económico y técnico. Como vimos, Garaudy desarrolla su pensamiento asumiendo una perspectiva analítica propia de países cuya población, en forma mayoritaria, ha superado la penuria. Nosotros, en el caso concreto del Perú, sociedad profundamente desigualitaria signada por la escasez y por la concentración de recursos escasos, tenemos que considerar con igual importancia un tercer problema no reducible en la práctica política —aunque pueda serlo en ciertas definiciones muy generales— al esfuerzo por la democracia y el desarrollo económico y tecnológico: la presión creciente de sectores sociales cada vez más amplios para la satisfacción de sus necesidades básicas. En el lenguaje popular, esto se identifica con la lucha por la justicia social, vale decir, la exigencia de mayores salarios reales, de estabilidad en el trabajo, de mejores servicios de salud, vivienda, educación y seguridad social, acceso a la recreación y a las distintas formas de expresión cultural, supresión de los privilegios y de una significativa reducción de las distancias económicas, sociales y políticas.

Las exigencias y presiones por la justicia social, no son la consecuencia teórica de una concepción de la sociedad que reivindique la solidaridad, el valor del trabajo y la necesidad de iguales oportunidades para todos. Se trata más bien, de una vivencia profundamente enraizada en los sectores más dinámicos y mejor organizados de las clases trabajadoras. Aquéllas son diariamente robustecidas por el efecto de demostración gene-

rado en los países del centro y por el estilo de vida de las clases dominantes. Una inmensa red de comunicaciones —radio, cine, televisión, prensa escrita, literatura política, acción de los partidos y grupos políticos, etc.— golpea sin cesar en esta dirección.

Y ciertamente, las exigencias crecientes por la satisfacción de las necesidades básicas entran en contradicción con las tendencias vigentes hacia formas de "democracia restringida" e intensa privatización o reprivatización de las economías nacionales.

En realidades como las nuestras, la supresión de los privilegios de las clases dominantes, muy difícilmente podría realizarse mediante regímenes democráticos clásicos, es decir, regímenes de negociación basados en la conciliación de los intereses de los grupos de poder económico y político. La experiencia enseña que por medios democráticos, la reducción de las distancias sociales sólo ha sido posible en períodos históricos de larga duración y, esto, para los países de "desarrollo originario" que no sufrieron la competencia de sociedades con un mayor grado de desarrollo industrial, científico y técnico.

Tenemos la alternativa de los modelos comunistas. Ellos en buena medida responden a los problemas de la justicia social —el caso cubano es un ejemplo— y se desarrollan de acuerdo a un conocido sistema de propiedad y acumulación estatal. Pero en los países subdesarrollados el desafío de la industrialización —proceso inevitable del desarrollo— no ha tenido aún respuesta eficiente. El costo fundamental de estos modelos reside en el Estado omnipotente, el partido único y las múltiples restricciones a la participación y, en general al ejercicio de ciertos derechos fundamentales.

¿Esto quiere decir acaso que estamos condenados a seguir uno u otro modelo? Decididamente no. Tienen que existir muchos caminos que no han sido transitados. Esos caminos serán tan distintos como diferentes sean las condiciones y recursos con que cuenten nuestras sociedades. Tenemos que seguir bus-

cando vías de desarrollo, procesos de liberación nacional que en la medida de los recursos y potencialidades de los respectivos países traten de realizar el ideal socialista mediante procesos que concilien la democracia, el desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría.

Probablemente por la situación de atraso y dependencia, escaso desarrollo técnico, débil proceso de industrialización, incipiente desarrollo científico, heterogeneidad de la estructura social, insuficiente organización de las clases populares, restringida base social de los partidos de izquierda, etc., los procesos revolucionarios en países subdesarrollados como el nuestro estarán llenos de contradicciones, frustraciones y desesperanzas. Pero pueden estar plenos también de voluntad transformadora, de imaginación creadora y esfuerzo genuino en la búsqueda y realización efectiva —aunque parcial— de la justicia social, el desarrollo económico y la democracia.

En estos términos debe ser comprendido el proceso revolucionario peruano: expresión de todas nuestras carencias y de nuestras mejores posibilidades en un momento determinado y decisivo de nuestra historia. En este sentido, la comprensión de la revolución peruana es un paso necesario para la formulación de nuevas estrategias. Muchas de las reformas iniciadas, instituciones creadas, ideas desarrolladas, proyectos compartidos, forman parte ya de esa tarea. La acción regresiva del actual gobierno, el retroceso de las conquistas populares, el avance de la derecha pueden ser mejor combatidos si conocemos cómo y por qué vivimos un proceso revolucionario. La unidad de las izquierdas y la convergencia de su acción en un proyecto político nacional también será más viable si se reconoce el auténtico punto de partida de esta nueva etapa en la vida del país. Para todo ello necesitamos de un estilo de lucha limpio y veraz. Como ha dicho Oscar Varsavski, debemos combatir el falseamiento de la palabra, arma temible que permite matar en nombre de Cristo, oprimir en nombre de Marx y pedir la protección del Estado en nombre de la libertad de empresa.

Ya no queda tiempo para preguntarse qué hubiera sido si. . . Quizá, cuando este ensayo haya sido publicado, las cartas estén jugadas y la izquierda peruana no haya emprendido un camino que concilie las necesidades del presente y la preparación del futuro, es decir, que atienda a las necesidades del desarrollo del movimiento popular –unificación y movilización crecientes de las clases populares y medias– y a la necesaria transición hacia un proceso económico autocentrado cuya primordial orientación esté referida a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías. . .

BIBLIOGRAFIA

ANAYA, Eduardo. *Imperialismo, Industrialización y Transferencia de Tecnología en el Perú,* Ed. Horizonte, Lima, 1974, pág. 66.

ARICO, José. *Mariátegui y los orígenes del pensamiento marxista latinoamericano,* Siglo XXI , S.A., México 1978.

ARON, Raymond. *La República Imperial,* EMECE Ed., Buenos Aires, 1974.

BASADRE, Jorge. *Perú: Problema y Posibilidad.* Biblioteca Peruana, Lima, 1931, pág. 241.

——. *La multitud, la ciudad y el campo.* Editorial Huascarán, Lima 1947, pág. 35.

BEJAR, Héctor. *Perú 1965: Una experiencia guerrillera,* Campodónico Ediciones S.A., Lima 1969.

——. *La revolución en la trampa,* Ediciones Socialismo y Participación, Lima 1976.

BOTANA, Natalio. *La legitimité probleme politique,* Buenos Aires, 1968.

BOURRICAUD, François. "Syndicalisme et politique: le cas perouvien", en *Sociologie du travail,* número especial, París, 1961.

——. "Remarques sur l'oligarchie perouvienne", en *Revue Française de Science Politique,* Vol. 4, París 1964.

——. *Pouvoir et societé dans le Pérou Contemporain,* París, 1967.

——. "Les regles du jeu en situation d'anomie: le cas perouvien", en *Sociologie du travail,* julio-setiembre 1967, p. 329-351.

——. "Estructuras sociales y regímenes políticos en América Latina", en *Revue de l'action populaire,* París, junio, 1973. p. 704.

CARDOSO, F.H. y FALETTO, E. *Dependencia y Desarrollo en América Latina.* Siglo XXI, Ed., Buenos Aires, 1974.

COTLER, Julio. *Clases, Estado y Nación en el Perú,* IEP, Lima, 1978, pág. 184.

VELASCO: DEL ESTADO OLIGÁRQUICO AL CAPITALISMO DE ESTADO de Francisco Guerra García, se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 1983 en los talleres de INDUSTRIAL*gráfica* S. A., Chavín 45, Lima 5, Perú.


cedep